

Sesión 46.a ordinaria en lunes 12 de agosto de 1933

(Sesión de 14.30 a 16 horas)

PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES RIVERA Y DE LA JARA

INDICE GENERAL DE LA SESION

- I.—Sumario del debate.
- II.—Sumario de documentos.
- III.—Acta de la sesión Anterior.
- IV.—Documentos de la cuenta.
- V.—Texto del debate.

I.—SUMARIO DEL DEBATE

1. Se pone en discusión el proyecto sobre pago de pensiones alimenticias y represión del delito de abandono de familia, y queda pendiente el debate.
-

II.—SUMARIO DE DOCUMENTOS

1. Mensaje que modifica el artículo 2.º del decreto con fuerza de ley número 33, de 12 de marzo de 1931, que creó la Junta Central de la Habitación Popular.
2. Mensaje que reemplaza el artículo 2.º de la ley número 5.142, de 2 de agosto de 1933, que transfiere un bien raíz a la Cooperativa Naval de Valparaíso.
3. Mensaje que autoriza a la I. Municipalidad de Santiago para cambiar el nombre de avenidas, calles, pasajes y callejue-

las en que exista duplicidad, repetición e inconveniencia en sus antiguos nombres.

4. Oficio del señor Ministro del Interior, con el que da respuesta a las observaciones del señor Martínez don Carlos A., sobre separación de algunos miembros de la Junta de Vecinos de Los Andes.
5. Oficio del mismo señor Ministro recaído en el proyecto de acuerdo de esta Cámara relativo a la necesidad de dar a la Caja de Previsión Social de Empleados Particulares el verdadero rol que inspiró su creación.
6. Oficio del mismo señor Ministro con el que se refiere a las observaciones del señor Cárdenas relacionadas con los servicios de Cesantía.
7. Oficio del mismo señor Ministro con el que da respuesta a la petición del señor Ríos don Juan A., sobre envío a la Cámara de los antecedentes relacionados con un contrato sobre transacción o reconocimiento de deuda celebrado entre la Compañía Chilena de Electricidad y la Municipalidad de Santiago.
8. Oficio del mismo señor Ministro relacio-

nado con la instalación de una oficina telegráfica en Panguipulli.

9. Oficio del mismo señor Ministro recaído en las observaciones del señor Torres Molina sobre expropiación del Servicio Particular de Agua Potable de Los Leones.

10. Oficio del mismo señor Ministro referente a las observaciones del señor Sepúlveda, en orden a que se aumente la dotación del Cuerpo de Carabineros de la ciudad de Chillán.

11. Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores con el que remite a la Cámara diversos documentos relacionados con la XXIX Conferencia de la Unión Interparlamentaria que se celebrará en Madrid en el mes de octubre próximo.

12. Oficio del mismo señor Ministro con el que se refiere a la insinuación del señor Cañas Lira, referente a la suscripción de un Tratado de Comercio con el Perú.

13. Oficio del señor Ministro de Fomento, recaído en el proyecto de acuerdo relativo a la conveniencia de publicar nuevamente la ley 5,213, por haberse publicado con algunas diferencias con respecto al texto aprobado por la Cámara.

14. Oficio del Honorable Senado con el que manifiesta que ha aprobado el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el Tratado de Comercio con la República Argentina.

15. Oficio del Honorable Senado con el que manifiesta que ha aprobado el proyecto que faculta al Presidente de la República para que en el curso del presente año, permita a las instituciones que indica para internar, libre de derechos, los abonos artificiales comprendidos en le número 47 del arancel aduanero.

16. Oficio del Honorable Senado con el que manifiesta que ha aprobado el proyecto que reemplaza el inciso 2.º del artículo 14 del decreto ley número 520, de 30 de agosto de 1932.

17. Oficio del Honorable Senado con el que manifiesta que ha aprobado el Tratado de Extradición entre Chile y el Perú, suscrito en Lima el 5 de noviembre de 1932.

18. Oficio del Honorable Senado con el que manifiesta que ha aprobado el proyecto que aprueba el Protocolo de Revisión del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya, suscrito en Ginebra, el 14 de septiembre de 1929.

19. Informe de la Comisión Especial de Solicitudes Particulares, recaído en las peticiones a que se refiere, formuladas por las personas que indica.

20. Informe de la Comisión designada para estudiar el abaratamiento de las subsistencias.

21. Informe de la Comisión de Gobierno Interior, recaído en la moción de varios señores Diputados para que la Municipalidad de Concepción destine la mitad del producto de la contribución adicional sobre bienes raíces, a que se refiere el artículo 26 del decreto con fuerza de ley número 245, para obras de pavimentación.

22. Informe de la Comisión de Educación Pública recaído en la moción de los señores Vicuña y Olavarría, que introduce algunas modificaciones en la organización universitaria.

III.— ACTA DE LA SESION ANTERIOR

Las actas de las sesiones 43.a y 44.a ordinarias, celebradas el día miércoles 16 de agosto, de 16 a 19 horas y de 19 a 20 horas, respectivamente, se declararon aprobadas por no haber merecido observación.

El acta de la sesión 45.a ordinaria, celebrada el día jueves 17, quedó a disposición de los señores Diputados.

Dice así:

Sesión 45.a ordinaria en jueves 17 agosto de 1933.— Presidencia del señor Rivera.

Se abrió a las 16 horas y 15 minutos y asistieron los señores:

Acharán A., Carlos.	Larraín T., Pablo.
Acuña R., Benigno.	Lira U., Enrique.
Alcalde C., Enrique.	Madrid O., Enrique.
Alfonso, Pedro.	Maira C., Fernando.
Ampuero G., Juan de Dios.	Manzano E., Zenón.
Amunátegui J., Gregorio.	Mardones V., Humberto.
Aránguiz C., Horacio.	Martínez M., Carlos A.
Arellano F., Humberto.	Martínez M., Julio.
Barros T., Roberto.	Merino R., Rolando.
Becerra, Maximiliano.	Meza L., Pelegrín.
Becker V., Cristiano.	Moore M., Eduardo.
Boizard, Ricardo.	Morales B., Raúl.
Bosch, Saturio.	Moreno E., Rafael.
Bustos V., Juan Bautista.	Murillo G., Ruperto.
Cáceres, Raúl.	Navarro H., Fortunato.
Cabezón D., Manuel.	Nieto C., Manuel.
Cañas F., Enrique.	Núñez G., Domingo.
Cañas L., Eduardo.	Olavarría B., Arturo.
Cárdenas N., Pedro.	Olave A., Ramón.
Carrasco R., Ismael.	Opitz V., Pedro.
Castelblanco A., Pedro.	Ortega M., Rudecindo.
Celis M., Armando.	Parodi B., Jorge.
Cifuentes L., Rafael.	Pereira L., Julio.
Concha M., Miguel A.	Pereira L., Jorge.
Correa F., Guillermo.	Pérez G., Jorge.
Cruz F., Manuel Isidoro.	Pérez G., Lindor.
Chanks, Oscar Armando.	Pinochet, Rafael.
Chaparro, Manuel.	Prieto C., Joaquín.
Durán B., Florencio.	Prieto L., Jenaro.
Del Canto, Rafael.	Quintana, Alfonso.
Ebensperger R., Jorge.	Retamales, Nicasio.
Echaurren A., Jorge Manuel.	Ríos A., José M.
Elorza M., Félix.	Ríos, Juan Antonio.
Errázuriz L., Gustavo.	Romero, Abraham.
Escobar D., Andrés.	Rosales, Eloy.
Estévez G., Carlos.	Serani B., Alejandro.
Ferrada R., Raúl.	Silva P., Juan.
Fuenzalida E., Edmundo.	Silva S., Luis A.
Gajardo V., Oscar.	Sotomayor P. C., Justino.
Gardeweg V., Arturo.	Terrazas, Luis Felipe.
Garrido S., Dionisio.	Toro M., Leoncio.
González G., Pedro E.	Torres C., Isauro.
Gutiérrez R., Aníbal.	Torres G., Ernesto.
Guzmán G., Samuel.	Torres M., Arturo.
Guzmán F., Eledoro Enrique.	Torres, Eugenio.
Huenchullán M., Arturo.	Uribe B., Luis.
Huerta, J. Manuel.	Urrejola, José Francisco.
	Urrutia C., Efraín.
	Urrutia G., Mario.
	Urzúa U., Jorge.

Valenzuela R., Juan de Dios.	Walker L., Joaquín.
Varas C., Fernando.	Yrarrázaval C., Rafael.
Verdugo E., Hipólito.	Zapata D., Emilio.
	Zúñiga, Armando.

El Ministro del Trabajo, señor García Olin, el Secretario señor Errázuriz Mackenna y el Prosecretario señor Echaurren Orrego.

Se dió cuenta:

1.º De un Mensaje de S. E. el Presidente de la República, con el que somete a la consideración del Congreso Nacional, un proyecto de ley que autoriza a los señores Enrique Costabal y a don Erich Richter y Compañía, para instalar una planta refinadora de petróleo.

Se mandó a Comisión de Industrias.

2.º De un oficio de S. E. el Presidente de la República, con el que recomienda a la Cámara el pronto despacho del proyecto que autoriza al Ejecutivo para cobrar un impuesto de un centavo por unidad de envase, destinado a procurrar recursos para atender a los gastos de fiscalización de la ley sobre envases de madera.

Se mandó agregar a los antecedentes del proyecto en Comisión de Agricultura y Colonización.

3.º De un oficio del señor Ministro del Interior, con el que remite los antecedentes pedidos por la Cámara, con respecto a la remoción del Tesorero de la Municipalidad de Santiago.

4.º De dos oficios del señor Ministro de Hacienda:

Con el 1.º contesta el que se le dirigió a petición del señor Casali, respecto de la aplicación de impuesto a los empleados de peluquería; y

Con el 2.º anuncia el envío de los antecedentes solicitados por numerosos señores Diputados, con respecto a la situación de la industria salitrera.

5.º De dos oficios del señor Ministro de Defensa Nacional:

Con el 1.º contesta las observaciones formuladas por el señor Merino, con relación a una consulta elevada al Ministerio por el frente único de ex servidores de la Armada; y

Con el 2.º contesta el oficio que se le di-

igió a petición de los señores Gardeweg y Pereira don Julio, sobre traslado a otro punto de las caballerizas del cantón militar de Providencia.

Quedaron a disposición de los señores Diputados.

6.o De 8 oficios del señor Ministro de Fomento:

Con el 1.o remite diversos antecedentes allegados por la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, acerca de los proyectos que penden de la consideración de la Cámara, sobre reincorporación, jubilación y desahucio del personal ferroviario.

Se mandó agregar a los antecedentes de los proyectos respectivos, en Comisión de Vías y Obras Públicas.

Con los siete restantes contesta las observaciones formuladas por los señores Diputados que se indican, acerca de los siguientes asuntos:

Por el señor Gajardo, sobre obras de alcantarillado en San Fernando;

Por el señor Acharán, acerca de las concesiones auríferas de San José de la Mariquina;

Por el señor Cárdenas, respecto a la ejecución de obras de abovedamiento del canal de descarga del servicio de Alcantarillado de Santiago, en las poblaciones Carrera y Velásquez.

Por los señores Moore y Gajardo, sobre servicio de agua potable de Pichilemu;

Por los señores Madrid don Enrique y Echaurren, sobre servicio de ferrocarriles para el ramal de Melipilla;

Por el señor Pinochet, respecto de la desinfección de trenes, y especialmente de los excursionistas que hacen el recorrido de Santiago a Valparaíso; y

Por los señores Parodi, Opitz, González don Pedro y Concha don Miguel, sobre permanencia de la Comisión de Geofísicos en la zona norte del país.

7.o De un oficio del señor Ministro del Trabajo, con el que da respuesta a las observaciones formuladas por el señor González don Pedro, respecto a la eliminación de obreros en el gremio marítimo de Tocopilla.

Quedaron a disposición de los señores Diputados.

8.o De un informe de la Comisión de Defensa Nacional, recaído en el Mensaje so-

bre enajenación del Cuartel del Regimiento Cazadores, ubicado en la Avenida Portugal, de esta ciudad.

Quedó en tabla.

9.o De una moción del señor Casali, que deroga el decreto ley número 667, de 30 de agosto de 1932, que desconoce a varios funcionarios de carabineros, el derecho de acogerse a los beneficios que se indican.

Se mandó a Comisión de Gobierno Interior.

10. De una moción de los señores Martínez Montt y Bustos, en la que inician un proyecto de ley que concede pensión de gracia a doña Ana C. Ferrada de Moreno.

Se mandó a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.

11. De una moción del señor Moreno don Rafael, en la que inicia un proyecto que modifica la ley sobre Timbres, Estampillas y Papel Sellado.

Se mandó a Comisión de Hacienda.

12. De una moción de los señores Guzmán don Eleodoro y Nieto, en la que proponen un proyecto que crea la Caja de Retiro, Montepío, Cesantía y Bienestar del personal de la Marina Mercante Nacional.

Se mandó a Comisión de Defensa Nacional.

13. De dos solicitudes particulares con las cuales las personas que se indican, piden reconocimiento de años de servicios:

Don Rubén Dávila I.; y

Don Juan Francisco Prieto Reyes.

Se mandaron a Comisión Especial de Solicitudes Particulares.

Entrando a ocuparse de los asuntos anunciados para la tabla de fácil despacho, sin debate y por asentimiento tácito, se dió por aprobado el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Artículo único. Se aprueban las cuentas presentadas por el señor Prosecretario y Tesorero de la Cámara, correspondientes al primer semestre de 1933, que ascienden en entradas a la suma de doscientos veinticinco mil novecientos ochenta y cinco pesos ochenta y siete centavos (\$ 225,985.87), y en gastos a la cantidad de doscientos treinta y cuatro mil siete pesos cuarenta y tres centavos (\$ 234,007.43), que deduciéndolos

de las entradas, arrojan un saldo en contra para el segundo semestre de ocho mil veintidós pesos cincuenta y seis centavos (\$ 8,021.56).

A indicación del señor Cabezón, se acordó agregar a la tabla de la orden del día, el informe de la Comisión Investigadora que fué a Molina.

Se pasó a tratar, en seguida, el proyecto en trámite reglamentario de segundo informe, que otorga un ascenso al personal de las fuerzas armadas que tomó parte en la Guerra del Pacífico.

La Mesa manifestó que por un error se había puesto en discusión en la sesión anterior el artículo 2.º, en lugar del 1.º, y que para regularizar el debate, se ponía en discusión el artículo 1.º

Usaron de la palabra los señores Pérez don Lindor y Carrasco.

El señor Pérez don Lindor, con las firmas reglamentarias, renovó la indicación de Su Señoría para suprimir en el artículo 1.º la frase: "y que justifiquen tener en sus hojas de servicios una o más acciones de guerra."

El señor Acharán, apoyado por 15 señores Diputados, presentó una indicación nueva, para consultar en el proyecto el siguiente artículo:

"Art. ... Los beneficios de esta ley se entenderán también concedidos a los veteranos de las campañas anteriores a la del Pacífico, que gozaren de pensiones o montepíos concedidos por las leyes vigentes, y a los actuales usufructuarios de las pensiones o montepíos que de ellos provengan".

El señor Carrasco en representación del Comité Social Republicano, pidió que este proyecto fuese retirado de la tabla de fácil despacho.

Puesta en votación esta indicación se dió por rechazada por asentimiento tácito.

El señor Carrasco formuló indicación para que el proyecto, conjuntamente con las indicaciones renovadas y nuevas, pasara en informe a la Comisión de Hacienda.

Puesta en votación esta indicación se dió por rechazada con un voto a favor.

Continuó la discusión del artículo 1.º y usó de la palabra el señor Garrido.

Por haber transcurrido el tiempo destina-

do a la tabla de fácil despacho, se dió ella por terminada.

Dentro de la orden del día, se pasó a tratar del proyecto en trámite reglamentario de segundo informe y declarado como de simple urgencia, sobre financiamiento del decreto ley número 33, sobre habitación barata.

Continuó el debate en particular de este proyecto y se puso en discusión el artículo 3.º

El señor Olave, apoyado por 7 señores Diputados, renovó la indicación de Su Señoría para suprimir la palabra "únicamente" en el primer renglón del inciso 1.º y para agregarle al final lo siguiente: "y demás beneficios que acuerda la ley".

Usó de la palabra el señor Torres don Isauro.

Cerrado el debate se puso en votación la indicación del señor Olave y se dió por rechazada por 34 votos contra 21.

Por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo en la forma propuesta por la Comisión.

Se puso en discusión el artículo 4.º y con las firmas reglamentarias se renovó la indicación del señor Martínez Montt y varios otros señores Diputados, para agregar el siguiente inciso:

"Estos bonos sólo podrán transferirse y cotizarse en Bolsa en la cuantía y condiciones que determine cada año el Presidente de la República".

El señor Serani formuló indicación para enviar el proyecto en estudio a la Comisión de Hacienda.

Puesta en votación esta indicación se dió por rechazada por 37 votos contra 10.

Cerrado el debate se puso en votación la indicación del señor Martínez Montt y otros y se dió por rechazada por 36 votos contra 21.

Por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo en la forma propuesta por la Comisión.

Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 5.º

Se puso en discusión el artículo 7.º y usaron de la palabra los señores Merino, Guzmán García, Torres don Isauro, Pérez don Lindor y García Oldini (Ministro del Trabajo).

Cerrado el debate se puso en votación el artículo y se dió por aprobado por asentimiento tácito.

Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aprobado el artículo 8.º

Se puso en discusión el artículo 9.º, respecto del cual el señor Merino y otros señores Diputados pidieron que fuese puesto especialmente en votación a fin de que fuese suprimido.

Usaron de la palabra los señores Pérez don Lindor, Merino, García Oldini (Ministro del Trabajo), Torres don Isauro y Silva don Luis.

Cerrado el debate se puso en votación el artículo y se dió por aprobado por 39 votos contra 5, conjuntamente con una indicación del señor Silva don Luis que se acordó admitir a votación, por asentimiento unánime, para reemplazar en el inciso 2.º la palabra "artículo", por "inciso".

Se puso en discusión el artículo 10 y el señor Serani, apoyado por 15 señores Diputados, presentó una indicación nueva para modificar el artículo en la forma siguiente:

Art. 10. Se presume que existe acuerdo entre el comprador y el vendedor respecto del precio de venta, cuando éste conste de recibos o antecedentes escritos fidedignos; pero, en este caso, a petición de parte, se podrá rectificar el precio de la compraventa en ellos estipulado si se comprobare de manera fehaciente:

a) Que el precio convenido es superior en un 25 por ciento o más al término medio que resulte de las escrituras públicas coetáneas, referentes a terrenos de condiciones análogas de la misma población y de otras escrituras del radio de la población de que se trate, en cinco cuadradas a la redonda a partir del límite de la población o de las poblaciones contiguas;

b) Que el vendedor no ha ejecutado las obras de pavimentación que prometió a los adquirentes a la fecha de formar la población;

c) Que el vendedor no ha ejecutado ni las obras de instalación de luz, ni de agua potable y desagües o alguna sola de éstas;

d) Que el vendedor ha faltado a una promesa y oferta que formuló a los adquirentes al formar la población o a cualquiera otra obligación que sea de la naturaleza del con-

trato y que diga relación con la salud, confort y facilidades de comunicación o movilización de los pobladores, siempre que consten de antecedentes fidedignos.

Para determinar el precio que dentro de las escrituras públicas a que se refiere la letra a) de este artículo debe atribuirse al terreno, se deducirá del valor indicado en ellos, el que según tasación de Impuestos Internos corresponde a las obras de urbanización por realizar".

Usaron de la palabra los señores Serani, Pérez don Lindor, Morales don Raúl, García Oldini (Ministro del Trabajo), González don Pedro, Guzmán García, Merino, y Cárdenas.

A indicación del señor Guzmán García se acordó dejar pendiente la discusión del artículo para la sesión próxima, conjuntamente con el resto del proyecto.

Se declaró terminada la orden del día y el señor Rivera (Presidente), suspendió la sesión por un cuarto de hora.

Trancurrido este plazo se reabrió la sesión y dentro de la hora de incidentes, los señores Cabezón, Pereira don Jorge, Retamales y Sotomayor, solicitaron que se dirigiera oficio al señor Ministro de Fomento, transmitiéndosele diversas observaciones que pasaron por escrito a la Mesa, sobre jubilación del personal de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado.

El señor Durán solicitó se dirigiera oficio al Departamento de Salubridad del Ministerio del Interior, para que obtenga de la Caja de Seguro Obrero la instalación de una Policlínica para la atención de los asegurados de la Comuna de Machalí, departamento de Rancagua, en atención al número de asegurados y las dificultades derivadas de la distancia en demanda de servicios médicos y facilidades administrativas para los asegurados, de que carecen en la actualidad.

Los señores Walker Larraín, Alcalde y Madrid don Enrique, solicitaron se dirigiera oficio al señor Ministro del Interior representándole la necesidad que existe de arbitrar las medidas policiales necesarias para resguardar las vidas y propiedades de

Curacaví, pues el escaso número de carabineros es incapaz de reprimir el bandidaje que hace innumerables víctimas en esa comuna.

El señor Torres don Isauro formuló indicación para que la moción de Su Señoría sobre creación del Colegio Médico, pase en estudio a las Comisiones de Constitución, Legislación y Justicia y de Asistencia Médico Social e Higiene.

El señor Núñez Galeno formuló indicación para que la Cámara celebre sesión secreta el miércoles 22 del presente, de 19 a 20-30 horas, a fin de tratar de solicitudes particulares.

El señor Pérez Gacitúa don Jorge, formuló indicación para que la Cámara acuerde celebrar sesiones especiales los días lunes 21 y martes 22, de 22 a 24 horas, con el objeto de tratar del proyecto sobre colonización agrícola.

El señor Gajardo formuló indicación para celebrar sesión especial el lunes próximo, de 14.30 a 16 horas, con el objeto de tratar del proyecto sobre responsabilidad paterna y pago de pensiones alimenticias.

Los señores Urrejola, Mardones y Larraín formularon indicación para que se trate en la tabla de fácil despacho de la sesión del lunes próximo el oficio del Ejecutivo en que se hacen observaciones a la ley que exige de impuesto de ventas comerciales a algunos artículos de primera necesidad, con o sin informe de Comisión.

Con respecto a esta indicación, el señor Rivera (Presidente), al finalizar la sesión, manifestó que reglamentariamente es facultad privativa de la Mesa fijar los asuntos que deben figurar en la tabla de fácil despacho, y en mérito de estas observaciones no fué sometida a votación.

El señor Retamales formuló diversas observaciones relacionadas con el funcionamiento de los Altos Hornos de Corral, y al respecto señaló la importancia de esta in-

dustria, a cuyo establecimiento había cooperado con todo entusiasmo.

El señor Nieto, que figuraba inscrito por acuerdo de la Cámara, expresó que en una próxima sesión trataría del asunto relacionado con el alza de fletes de la Marina Mercante Nacional.

El señor Chanks llamó la atención de la Cámara respecto de la actitud asumida por algunos Senadores del Partido Demócrata, en la votación del Tratado Comercial con la República Argentina.

El señor Urrutia don Mario, usó de la palabra para rectificar la versión de la sesión 28.a, en la cual aparece Su Señoría firmando un proyecto de acuerdo sobre limitación de las horas de trabajo, en lugar del señor Urrutia don Efraín, que fué el verdadero autor de esta indicación en unión con otros señores Diputados.

El señor Rosales formuló diversas observaciones con respecto al problema de la cesantía y a las medidas que a juicio de Su Señoría podrían adoptarse para dar a este problema una pronta solución.

El señor Maira usó de la palabra para hacerse cargo de las observaciones hechas por el señor Serani, en la sesión del 7 de agosto último, respecto de la labor del Ministro de Educación, señor Domingo Durán.

El señor Martínez Montt formuló diversas observaciones relacionadas con la jubilación del personal ferroviario y pidió que ellas fuesen puestas en conocimiento del señor Ministro de Fomento, conjuntamente con las que, sobre el mismo asunto, formulara Su Señoría en la sesión 29.a, en 14 de marzo último.

Sin debate y por asentimiento tácito se dió por aceptada la renuncia del señor Moreno del cargo de miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia y a propuesta del señor Rivera (Presidente, se designó en su reemplazo al señor Urrejola.

A propuesta de la Mesa, quedaron designados los siguientes señores Diputados para formar la Comisión Especial de Reglamento:

Guzmán García, don Samuel.
 Merino don Rolando.
 Morales don Raúl.
 Müller don Carlos.
 Cifuentes don Carlos.
 Silva Pinto don Juan.
 Silva don Luis A.
 Sotomayor don Justiniano.
 Urrejola don J. Francisco.
 Yrarrázaval don Rafael;
 Y los tres miembros de la Mesa.

El señor Acharán pidió a la Mesa se sirviera colocar en la tabla de fácil despacho, el proyecto que autoriza a la Caja de Crédito Popular para conceder préstamos a los empleados públicos y de otras instituciones, con el objeto de que sean invertidos en compra de mercaderías.

El señor Rivera (Presidente), manifestó que tendría presente esta insinuación al fijar dicha tabla en la sesión próxima.

Los señores Gardeweg y Pereira don Julio presentaron a la consideración de la Cámara, el siguiente

PROYECTO DE ACUERDO:

"Que atendidos los fundamentos dados a conocer por el señor Ministro del Interior en la versión de los diarios de esta mañana, de los que se desprende que el ex comodoro del aire, señor Marmaduke Grove ha ejercitado actividades revolucionarias tendientes a subvertir el orden público; que este señor está percibiendo una cuantiosa suma por capítulo de retiro del Ejército que se paga con dinero de todos los ciudadanos que hoy día sólo están empeñados en mantener el orden constitucional; que no es aceptable que un individuo se aproveche de los dineros generales del Estado para ejercitar actividades de esa clase:

La Cámara acuerda sugerir al señor Ministro de Defensa Nacional la necesidad que existe de llamar a las filas al indicado ciudadano a objeto de proceder a su separación".

Este proyecto quedó para segunda discu-

sión, en conformidad a una petición hecha al efecto por el Comité Socialista.

Se procedió a votar las indicaciones pendientes.

Por asentimiento tácito se dió por aprobada la del señor Núñez;

Por 47 votos contra 5 se dió por aprobada la del señor Gajardo;

Por 38 votos contra 16 se dió por aprobada la del señor Pérez don Jorge; y

Por asentimiento tácito se dió por aprobada la del señor Torres don Isauro.

Por haber llegado la hora de término de la sesión, que quedó prorrogada hasta el término de la votación de las indicaciones, se levantó ésta a las 19 horas y 7 minutos.

IV.—DOCUMENTOS DE LA CUENTA

1) Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El decreto con fuerza de ley número 33, de 12 de marzo de 1931, creó la Junta Central de la Habitación Popular, con el objeto de procurar vivienda sana y de bajo precio a las personas de escasos recursos.

La composición de la Junta es a base funcionaria, integrándose con miembros que representan a Sociedades Obreras con personalidad jurídica, afectos a la ley de que se trata.

Para los fines que tuvo presente el legislador, se hace conveniente ampliar la composición de la expresada Junta, con elementos técnicos, pues ello vendría a satisfacer una necesidad.

En efecto, la ley de que se trata, se ocupa de múltiples problemas que requieren la concurrencia técnica, pues así los proyectos que fuere necesario elaborar, serían sometidos a un estudio que contemplara todas sus fases.

Tal cosa se consigue ampliando la composición de la Junta, con miembros técnicos y de libre designación por el Presidente de la República, ya que en cada caso se oiría

la opinión de los expertos de la materia sometida al estudio.

Por todas estas consideraciones, tengo a honra someter a vuestra deliberación, para que sea tratado en el actual período de sesiones, el siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Reemplázase la frase: “y de cuatro miembros designados por el Presidente de la República, uno de los cuales deberá pertenecer a una Sociedad Obrera que tenga personalidad jurídica. Estos cuatro últimos durarán en sus funciones tres años y podrán ser reelegidos indefinidamente”, del artículo 2.º del decreto con fuerza de ley número 33, de 12 de marzo de 1931, por la siguiente: “y de 10 miembros designados por el Presidente de la República, 3 de los cuales deberán pertenecer a Sociedades Obreras con personalidad jurídica, tres a Institutos Técnicos y el resto de libre elección.

Todos estos miembros durarán en sus funciones un año y podrán ser reelegidos indefinidamente”.

La presente ley empezará a regir desde su publicación en el “Diario Oficial”.

Santiago, 14 de agosto de 1933.—(Fdos.)
—Arturo Alessandri.—F. García Oldini.

2) Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

Por mensaje de fecha 24 de diciembre de 1932, el Poder Ejecutivo sometió a la consideración y aprobación del Congreso Nacional un proyecto de ley, por el cual se faculta al señor Director General de la Armada para transferir, a título gratuito, a la Cooperativa Naval de Valparaíso una propiedad raíz de dominio fiscal, ubicada en la calle Victoria de esta ciudad, cuyos deslindes e indicaciones de la inscripción de dominio se mencionan en el referido mensaje.

Se indican como fundamentos de este proyecto la circunstancia de que esta propiedad fué adquirida por el Fisco por haberse

declarado a su favor el derecho a la herencia yacente quedada al fallecimiento de doña Joaquina Mujica, según consta de la adjudicación e inscripción de dominio que se menciona en el recordado mensaje; que, desde hace más de 20 años, la Sociedad Cooperativa Naval de Valparaíso tiene por autorización suprema el goce de dicha propiedad, en la cual ha efectuado de su propio peculio inversiones cuantiosas en edificios que, en sí, casi alcanzan al valor de tasación que tenía el terreno en la fecha en que le adjudicó al Fisco; que, la Sociedad Cooperativa Naval no tiene un fin de lucro sino hacer menos onerosos a sus asociados, que son miembros de la Marina de Guerra, los gastos que le impone la vida profesional, ha debido vencer durante 20 años los obstáculos de distinto orden que se presentan para instituciones de esta índole, desprovistas en su mantenimiento y desarrollo de los recursos que proporcionan las utilidades de un giro comercial y, no obstante, gracias a su austera y honrada administración ha podido mantenerse y cimentarse, adquiriendo prestigio y confianza entre sus asociados y por último que, el Estado procura en la actualidad fomentar las instituciones de cooperación y así la legislación especial sobre la materia consulta, con tal objeto, la concesión de propiedades del Fisco y de las Municipalidades, facilidades y preferencias en los transportes, franquicias y rebajas de contribuciones y otras medidas que sacrifican las rentas o el patrimonio fiscal, pero que al mismo tiempo procuran realizar la función social de acudir al mantenimiento y amplia difusión en el país de las sociedades cooperativas de distinta especie.

El Congreso Nacional acogió el proyecto indicado, pero al aprobarlo le agregó un artículo 2.º en el cual se expresa que deberá quedar consignada además en la escritura de transferencia la prohibición de gravar o enajenar el inmueble que se transfiere.

La ley, en la forma así despachada, viene a asignar un dominio limitado a la Sociedad Cooperativa Naval, el cual no le irroga ningún beneficio, ya que ella por autorización suprema tiene el goce gratuito de la propiedad en referencia desde hace más de 20 años. En consecuencia, en la práctica la

ley mencionada si bien mejora el título ju-

rídico en virtud del cual tiene el goce de esa propiedad, en cambio no le mejora en ninguna forma su goce actual, puesto que la Cooperativa no podrá ligar jamás su desarrollo al dominio de esa propiedad y no podrá solicitar créditos con garantía de la misma, que es lo que necesita a fin de mantenerse y dar el debido desarrollo e impulso a sus actividades para llenar los fines a que está llamada.

Por tanto, la ley referida, en la forma en que está consignada no llena los fines que el Gobierno tuvo en vista al proponer el mensaje correspondiente.

Por estas consideraciones y con el objeto de obtener los beneficios referidos, se somete a la consideración y aprobación del Soberano Congreso el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo único. Reemplázase el artículo 2.º de la ley número 5,142, de 2 de agosto de 1933, por el siguiente:

"Artículo 2.º En la escritura de transferencia el Director General de la Armada dejará establecido que, esta propiedad, en el estado en que se encuentra, volverá a poder del Fisco, si siendo de dominio de la Cooperativa Naval, ésta se disolviere por cualquier causa o cuando ésta tome un giro netamente comercial de lucro en dinero en favor de sus socios o cualquiera otro que no tenga por único objeto proveer a la necesidad de hacer menos onerosos a sus asociados, miembros de la Marina de Guerra, los gastos que impone su vida profesional o que con ella se relacionan". — (Fdos.) — **Arturo Alessandri.—Emilio Bello.**

3) Mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República:

Conciudadanos del Senado y de la Cámara de Diputados:

El decreto con fuerza de ley número 322, de 20 de mayo de 1931, autorizó a la Municipalidad de Santiago para cambiar, previos ciertos requisitos y dentro del plazo de 90 días el nombre de todas aquellas avenidas, calles, pasajes y callejuelas, públicas o particulares, en que existía duplicidad, repetición o inconveniencia de dichos nom-

bres o que ellos hubieran sido dados en forma ilegal, arbitraria o que se prestara a confusiones.

La indicada Municipalidad no pudo dar cumplimiento en su oportunidad al decreto con fuerza de ley a que se ha hecho referencia.

La defectuosa denominación de algunas calles de esta ciudad y de comunas vecinas, origina serios inconvenientes, entre otros, a los servicios de Correos y Telégrafos, al vecindario y a los visitantes de la capital.

La Corporación mencionada ha solicitado del Gobierno que se le autorice nuevamente para corregir las deficiencias anotadas, concediéndosele un plazo prudencial para su debido cumplimiento.

Por estas consideraciones, tengo el honor de someter a vuestra aprobación el siguiente

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.º Autorízase a la Municipalidad de Santiago, para que, dentro del plazo de 90 días, contados desde la vigencia de esta ley, y previo informe de las Municipalidades de las comunas colindantes y aprobación del Gobierno, efectúe, por una sola vez, el cambio de nombre de todas aquellas avenidas, calles, pasajes y callejuelas, públicas o particulares, en que exista duplicidad, repetición o inconveniencia de dichos nombres o que éstos hayan sido dados en forma ilegal, arbitraria o que se preste a confusiones.

Art. 2.º La Municipalidad publicará en un diario de la comuna, los nombres que se acuerden en definitiva, e indicará al mismo tiempo, correlativamente, los nombres que hayan sido reemplazados.

Art. 3.º La presente ley empezará a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial". — Santiago, 19 de agosto de 1933. — (Fdos.) — **Arturo Alessandri. — Alfredo Piwonka.**

4) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 839. — Santiago, 18 de agosto de 1933. — Por oficio número 497, de 10 del actual, a petición del Diputado don Carlos A. Martínez, V. E. pide se le remitan los antecedentes que se han tenido en vista para se-

parar de sus cargos a los miembros de la Junta de Vecinos de Los Andes, señores Carlos Herrera y Santiago Muñoz.

Ruego a V. E. se sirva, si lo tiene a bien, manifestar al señor Diputado que el Gobierno estimó conveniente separarlos porque los cargos de vocales de Juntas de Vecinos son cargos de confianza y públicos, por el momento, de nombramiento de Su Excelepia el Presidente de la República, y no pueden ser desempeñados por personas que predican ideas disociadoras. — Dios guarde a V. E.—(Fdo.)—**Alfredo Piwonka.**

5) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 838. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—Ha tomado conocimiento este Ministerio del proyecto de acuerdo de esa Honorable Cámara, relativo a la necesidad de dar a la Caja de Previsión Social de Empleados Particulares, el verdadero rol social que inspiró su creación, haciendo presente al mismo tiempo, la conveniencia de acelerar el estudio que efectúa actualmente el Departamento de Previsión Social, enviando a la Cámara un mensaje que modifique la situación de la Caja de Empleados Particulares.

Sobre el particular, me es grato manifestar a V. E. que esta Secretaría de Estado ha transerito a los Ministerios de Hacienda y Trabajo, el acuerdo en referencia, para los fines que en él se indican, por corresponder a dichos Departamentos su resolución. — Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Alfredo Piwonka.**

6) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 842. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—Por oficio número 313, de 13 de julio próximo pasado, V. E., a petición del Diputado don Pedro Cárdenas, solicitó algunos datos relacionados con los Servicios de Cesantía, especialmente con respecto a los fallecidos desde el 1.º de julio en el albergue "Salas".

Sobre el particular tengo el agrado de remitir a V. E. el oficio del Ministerio del Trabajo número 1,141, de 14 del presente, que contiene los datos solicitados por V. E. —Dios guarde a V. E.— (Fdo.) — **Alfredo Piwonka.**

7) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 843. — Santiago, 18 de agosto de 1933.— Por oficio número 351, de 20 de julio próximo pasado, a petición del señor Diputado don Juan Antonio Ríos, solicitó de esta Secretaría de Estado recabara de la Junta de Vecinos de Santiago el envío a esa honorable Cámara de los antecedentes relacionados con un contrato sobre transacción o reconocimiento de deuda, celebrado entre la Compañía Chilena de Electricidad y la Municipalidad de Santiago.

Informando sobre el particular el Alcalde de Santiago manifiesta que la Honorable Corporación que él preside no ha adoptado acuerdo alguno relacionado con la materia de que se trata, durante el presente año.— Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Alfredo Piwonka.**

8) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 837. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—Con referencia al oficio de V. E. número 413, de 23 de marzo próximo pasado, tengo el honor de transcribir a V. E. el siguiente informe expedido por el Director General de Correos y Telégrafos, el 7 del mes en curso:

"Tengo el honor de informar a U.S. la providencia número 5.110, de 31 de marzo próximo pasado, relacionada con la instalación de una oficina telegráfica en el punto denominado Panguipulli, de la provincia de Valdivia.

Al respecto, esta Dirección General, de acuerdo con los informes enviados por la Jefatura del Sector de Valdivia, y con los precios actuales de los diversos materiales, ha confeccionado un presupuesto de gastos correspondiente para el tendido de 47 kilómetros de línea entre Lanco y Panguipulli, ascendente a la suma de 18.484,25 pesos.

No se consulta en este presupuesto la postación, porque algunos vecinos han ofrecido contribuir con ella.

El servicio no cuenta con materiales suficientes para atender esta obra durante el curso del presente año, y puede tenerla presente para incluirla en el programa del año próximo, salvo que el interés del vecindario permita obtener alguna cooperación en

cuanto al monto de este gasto". — Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Alfredo Piwonka.**

9) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 841. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—En atención al oficio de V. E. número 403, de 29 de julio próximo pasado, que se refiere a diversas observaciones formuladas por el señor Diputado don Arturo Torres Molina, me es grato trascribir a V. E. el oficio número 4,324, de 7 del actual, de la Dirección General de Agua Potable y Alcantarillado, que dice lo siguiente:

"Por providencia número 9,946, de fecha 1.º de agosto próximo pasado, US. pidió informe a esta Dirección General sobre las observaciones formuladas por el honorable Diputado don Arturo Torres Molina, en que se pide la expropiación del Servicio Particular de Agua Potable de Los Leones.

En sus observaciones el señor Torres Molina dice que el agua que actualmente suministra la empresa de Los Leones es de mala calidad e insuficiente en cantidad. A este respecto tuve ya el honor de informar a US. en diversas oportunidades que, en cuanto a calidad, es idéntica a la que provee la Empresa de Santiago, por cuanto se capta a corta distancia y en la misma forma que aquella, por renes en las orillas del río Mapocho en Vitacura, y es esterilizada por el cloro. En cuanto a cantidad, las instalaciones son capaces de suministrar toda la demanda y, al efecto, las estadísticas demuestran que el consumo en el verano pasa de 500 litros por habitante por día, consumo que es superior al que hace el resto de la ciudad de Santiago.

En cuanto al precio a que se expende el agua a los consumidores, éste no es cuatro veces superior al que cobra la Empresa de Santiago, como lo asegura el señor Diputado: la tarifa es a razón de 50 centavos el metro cúbico, contra 20 centavos que se cobra por la Empresa de Santiago. Este mayor precio se justifica por la circunstancia de que el agua debe ser elevada mecánicamente con gasto de energía eléctrica. Recientemente la Empresa de Los Leones acordó rebajar su tarifa, igualándola con la de la Empresa de Santiago para todos los consumidores de escasos recursos, que en realidad son pocos en ese barrio, ya que Los Leones

es un barrio residencial de gente pudiente.

Esta Dirección General tiene conocimiento de que la Empresa de Agua Potable de Santiago tiene acordado ya extender su abastecimiento hasta Los Leones, para lo cual tiene terminados los estudios correspondientes.

Me hago el deber de manifestar a V. E. que en el estado actual de la Hacienda Pública no se justificaría que el Fisco distrajera fondos únicamente con el objeto de abaratar el valor del agua de 50 centavos a 20 centavos en un barrio residencial de gente pudiente, en circunstancias que existen en el país ciudades que no cuentan con servicio alguno de agua potable, y otras en que teniendo servicio establecido, ésta se expenda a 10 u 8 pesos el metro cúbico, precio que podría abarataarse con la construcción por el Fisco de ciertas obras que hacen falta". — Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Alfredo Piwonka.**

10) Oficio del señor Ministro del Interior:

Núm. 840. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—Por oficio número 419, de 1.º del actual, V. E. dió a conocer a este Ministerio las observaciones formuladas por el señor Diputado don J. Miguel Sepúlveda, en orden a que se aumente la dotación del Cuerpo de Carabineros en la ciudad de Chillán.

Sobre el particular, debo hacer presente a V. E. que el Cuerpo de Carabineros no ha sido exceptuado aun de lo dispuesto en la ley número 5,170, de 30 de mayo del presente año, que dispone que las vacantes que se produzcan en la Administración Pública no serán proveídas durante el resto del año.

En esta repartición se producen numerosas vacantes, ya sea por eliminación de malos elementos o por razones de otro orden, no solamente en los grados de oficiales sino también en tropa.

Por oficio número 741, de 12 de julio próximo pasado, el Ministerio hizo presente a esa Honorable Cámara que era de temer que la acción de estos servicios se resintiera seriamente si tales vacantes no se proveían.

Por otra parte, y en esa misma oportunidad el Gobierno hizo suyo el proyecto de ley a que se refiere la moción mencionada por el señor Diputado don Manuel Nieto en se-

sión de 5 de ese mismo mes, y se permitió recomendarlo a la aprobación de esa Honorable Corporación, haciéndolo extensivo al Servicio de Investigaciones, Identificación y Pasaportes, a fin de evitar en lo futuro serios tropiezos en la marcha normal de estos servicios que tienen a su cargo el mantenimiento del orden en la República y la seguridad de sus habitantes.

Por las razones expuestas, y mientras no se resuelva esta situación, no es posible acceder a lo solicitado por el señor Diputado don J. Miguel Sepúlveda. — Dios guarde a V. E.—(Fdo.)—**Alfredo Piwonka**.

11) Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores:

Núm. 5,030.—Santiago, 18 de agosto de 1933.—Con referencia al oficio número 3,248, de este Ministerio, enviado a V. E. con fecha 26 de mayo del año en curso, me es grato remitir a V. E. con la presente comunicación, diversos documentos relacionados con la Conferencia de la Unión Interparlamentaria que tendrá lugar en Madrid desde el miércoles 4 hasta el martes 10 de octubre de 1933.

Los documentos mencionados fueron remitidos a este Departamento por nuestra Embajada en España con oficio número 272 de 10 de junio próximo pasado, cuya copia acompaña a V. E. — (Fdo.)—**Miguel Cruchaga**.

12) Oficio del señor Ministro de Relaciones Exteriores:

Núm. 5,023.—Santiago, 18 de agosto de 1933.—Tengo el agrado de acusar recibo del oficio de esa Honorable Cámara, fecha del 1.º de agosto en curso, por medio del cual V. E. se sirve comunicarme que el señor Diputado don Eduardo Cañas Lira, en sesión de 31 de julio próximo pasado, solicitó se insinuara a este Ministerio se estudiara la posibilidad de suscribir un Tratado de Comercio con el Perú.

En respuesta, me es grato manifestar a V. E. que, desde hace mucho tiempo, este Ministerio tiene la preocupación de llegar a concluir un Tratado Comercial definitivo con el Perú, de acuerdo con lo que se expresa en la parte final del último convenio pro-

visional. Dicho Tratado se encuentra ya en negociación y este Ministerio espera que podrá suscribirse antes de octubre próximo, es decir, antes de la fecha de expiración del *Modus Vivendi* actualmente en vigencia.—Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Miguel Cruchaga**.

13) Oficio del señor Ministro de Fomento:

Núm. 959. — Santiago, 18 de agosto de 1933.—En respuesta al oficio de V. E. número 478, de 9 del actual, en el que se sirve trascribir al infrascrito el proyecto de acuerdo aprobado por esa Honorable Cámara relativo a la conveniencia de publicar nuevamente la ley número 5,213, por haberse publicado con algunas diferencias respecto al texto aprobado por esa Honorable Corporación, tengo el honor de manifestar a V. E. que dicha rectificación ya ha sido hecha, habiendo aparecido en el "Diario Oficial" del 10 de los corrientes. — Dios guarde a V. E. — (Fdo.) — **Domingo Santa María**.

14) Oficio del Honorable Senado:

Núm. 415.— Santiago, 17 de agosto de 1933.— El Honorable Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el Tratado de Comercio con la República Argentina, suscrito en Buenos Aires, el 3 de junio de 1933.

Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio número 337, de 19 de julio próximo pasado.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.)— **Ignacio Urrutia Manzano**.— **Enrique Zañartu E.**

15) Oficio del Honorable Senado:

Núm. 413.— Santiago, 17 de agosto de 1933.— El Honorable Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos términos en que lo hizo esa Honorable Cámara, el proyecto por el cual se faculta al Presidente de la República para que, en el curso del presente año, permita a la Caja de Crédito Agrario, y a las Sociedades: **Agrícola del Sur**, **Agrí-**

cola del Norte, Nacional de Agricultura, Cooperativa y Fomento Agrícola de Temuco y Agrícola y Ganadera de Osorno, internar, libre de derechos, los abonos artificiales comprendidos en el grupo 47 del Arancel Aduanero.

Tengo el honor de decirlo a V. E., en contestación a vuestro oficio número 249, de 3 de julio próximo pasado.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.).— **Ignacio Urrutia Manzano.— Enrique Zañartu E.**

16) Oficio del Honorable Senado:

Núm. 411.— Santiago, 17 de agosto de 1933.— Con motivo del Mensaje e informe que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Honorable Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Se reemplaza el inciso segundo del artículo 14 del decreto ley número 520, de 30 de agosto de 1932, por el siguiente:

“El Comisario General, será su representante legal, y dentro de los treinta días siguientes a su nombramiento, rendirá una fianza equivalente a dos años de sueldos, la que será calificada por la Contraloría General de la República”.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.).— **Ignacio Urrutia Manzano.— Enrique Zañartu E.**

17) Oficio del Honorable Senado:

Núm. 412.— Santiago, 17 de agosto de 1933.— Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Honorable Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Aprébase el Tratado de Extradición entre Chile y el Perú, suscrito en Lima el 5 de noviembre de 1932”.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.).— **Ignacio Urrutia Manzano.— Enrique Zañartu E.**

18) Oficio del Honorable Senado:

Núm. 414.— Santiago, 17 de agosto de 1933.— Con motivo del Mensaje, informe y demás antecedentes que tengo el honor de pasar a manos de V. E., el Honorable Senado ha dado su aprobación al siguiente

PROYECTO DE LEY:

“Artículo único. Apruébase el Protocolo de Revisión del Estatuto de la Corte Permanente de Justicia Internacional de La Haya, suscrito en Ginebra, el 14 de septiembre de 1929.

Dios guarde a V. E.— (Fdos.).— **Ignacio Urrutia Manzano.— Enrique Zañartu E.**

19) Informe de la Comisión Especial de Solicitudes Particulares, recaído en las peticiones a que se refiere, formuladas por las personas que indica.

20) Informe de Comisión:

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión designada para estudiar los medios de abaratar las subsistencias, después de varias reuniones, pasa a informar a la Honorable Cámara, estudiando separadamente los diversos artículos de primera necesidad que, a su juicio, deben mantenerse a precios bajos, e indicando las medidas que es necesario adoptar con este fin.

Trigo y Harina

Se ha dicho que en el comercio del trigo y pan no debe intervenir el Estado, porque no tiene medios para organizar la producción y la venta.

Esto no puede aceptarse, porque el Estado moderno debe tener como preocupación fundamental el procurar la alimentación al mayor número posible de ciudadanos, velando porque ésta sea de buenas condiciones y que esté al alcance de todos los hogares sociales.

En Italia, en Alemania, en Suiza, en Francia y en casi todos los países de Europa se ha fomentado la producción de ce-

reales y del trigo especialmente; se ha reglamentado la molienda del trigo; se fiscaliza severamente su comercio y en la elaboración y precio del pan tiene una intervención directa que evita especulaciones.

Desde el año 1928, el Gobierno noruego tiene el monopolio único del comercio de cereales, fijando anualmente los precios; y, en Uruguay, el Gobierno está autorizado, aun para adquirir el total de la producción y fijar precios de venta.

Entre nosotros existe legislación en este sentido, pero hay que confesar que ella no ha dado el resultado que debía esperarse.

La mala clase de semillas; el alto interés bancario; la deficiencia de abonos y métodos de cultivo; la anarquía en los precios y la especulación desenfrenada de comerciantes inescrupulosos, ha tenido, como consecuencia, que el pan sea en nuestro país un verdadero artículo de lujo y que no esté casi ya al alcance de los hogares de la clase trabajadora.

Los Poderes Públicos deben encarar este problema fundamental y solucionarlo sin contemplar intereses, mirando tan sólo el bien general.

Entre nosotros se ha reconocido oficialmente como costo de molienda de trigo la cantidad de 22 pesos 40 centavos quintal métrico.

Según estudio hecho por el Comisariato de Subsistencias a principios de este año, en los diversos molinos de la provincia de Santiago el costo término medio de la molienda es sólo de 13 pesos 64 centavos por quintal, y como es de suponer que esta proporción sea también la misma en el resto del país, tenemos que por este sólo capítulo los industriales molineros perciben una utilidad de casi 10 pesos por quintal, que les asegura intereses muy subidos sobre los capitales invertidos.

Como en Chile se elaboran cerca de 4.800.000 de quintales de trigo, por este sólo capítulo, la molinería tiene una utilidad de cerca de 48.000.000 de pesos, que deben pagar los consumidores.

Una utilidad casi tan excesiva obtiene también la industria de panaderías, lo que indica la urgencia de adoptar un remedio eficaz para evitar el abuso que influye decisivamente en el costo de la alimentación.

Esta especulación ha recrudecido y ha

tomado proporciones alarmantes desde el año 1931, con la creación de las Asociaciones Molineras, organizaciones cuya existencia no debe permitirse si se desea el abaratamiento del pan, pues no tiene otro fin que asegurar a la industria utilidades cada día más excesivas a costa de la colectividad.

Para resolver el problema del trigo y harina en buenas condiciones es indispensable un buen servicio de estadística, dotado de elementos suficientes para que pueda informar en tiempo oportuno sobre semillas, siembras, cosechas y existencias de trigo y harina en el país.

Así se verá el caso nuevamente, como a principios de este año, en que se aseguró faltaría 1.000.000 de quintales de trigo, para ésta establecerse después que la cosecha era suficiente para el consumo.

El problema del trigo, harina y pan es muy complejo y necesidad habría de crear un organismo permanente que tuviera el control de este asunto, organismo en el cual debieran estar representados los productores, comerciantes y consumidores.

De ahí que la Comisión se refiera en su informe a los puntos más urgentes que tienen relación con la molienda de trigo y comercio de harina y fabricación de pan.

En consecuencia, indica como medios de abaratar el trigo, harina y pan los siguientes:

1.º Disolver las Asociaciones de Molineros, porque estas organizaciones necesariamente llegan a tener un fin contrario al interés público al procurar alzar el valor de la harina, valiéndose de procedimientos que constituyen un verdadero monopolio de este artículo.

2.º Procurar disminuir el número de molinos, porque existen en el país cerca de 900 molinos, cuando podría hacerse el trabajo de molienda del trigo con la mitad de estos establecimientos.

Es indudable que con un menor número de molinos se podría reducir apreciablemente el costo de la elaboración de la harina, pues forzosamente los gastos tendrían que ser menos al hacerse el trabajo en establecimientos industriales de mayor capacidad.

3.º Rebajar el costo de la molienda del trigo al valor que realmente tiene, y que

consecuencia, una solución satisfactoria por las dos cuestiones que preocupan a la Municipalidad y al vecindario de Concepción, mejoramiento del alumbrado público y la pavimentación, sin necesidad de gravar con mayores cargas al contribuyente.

En efecto, calculando un rendimiento mínimo a ese impuesto de unos \$ 200,000 anuales, la porción correspondiente de este impuesto y los demás recursos de pavimentación que por ley tiene esa comuna, permitirán a la Municipalidad de Concepción destinar una suma apreciable al mejoramiento de sus pavimentos, ya sea en forma paulatina, o bien, si las condiciones del mercado interno del país lo permiten, y de acuerdo con el decreto con fuerza de ley número 197, ya individualizando, proceder a la contratación de un empréstito, que se servirá con las rentas ordinarias indicadas, y que permitirá efectuar esos trabajos con mayor rapidez.

La exposición de antecedentes que se ha hecho, derivada del espíritu que dominó en Vuestra Comisión al discutir este proyecto, determina la opinión favorable que le merecieron sus disposiciones, convenientes, dentro de la situación actual, para el adelanto de la ciudad de Concepción.

Por tanto, Vuestra Comisión de Gobierno Interior recomienda a la Honorable Cámara que tenga a bien prestar su aprobación al proyecto que se inserta más adelante, el cual, salvo algunas ligeras modificaciones, no difiere del contenido en la moción en informe.

Dice el proyecto así:

PROYECTO DE LEY:

“Artículo 1.º La mitad del producto de la contribución adicional sobre bienes raíces en la comuna de Concepción, a que se refiere el artículo 26 del decreto con fuerza de ley número 245, de 15 de mayo de 1931, relativo a rentas municipales, se destinará a la ejecución de obras de pavimentación en esta comuna.

Art. 2.º Los fondos que se obtengan con la aplicación del artículo anterior, se considerarán como recursos de pavimentación de la nombrada comuna, en la misma forma que los indicados en el artículo 29

del decreto con fuerza de ley número 197, de 30 de mayo de 1931.

Artículo 3.º Desde la promulgación de la presente ley, se considerarán vigentes, para la comuna de Concepción, las disposiciones del citado decreto con fuerza de ley número 197; y serán de cargo de los propietarios colindantes el costo de los dos tercios del valor de la pavimentación de la calzada y solera y el total del valor del pavimento de la acera.

Art. 4.º Esta ley regirá desde su publicación en el “Diario Oficial”.

Sala de la Comisión, a 18 de agosto de 1933.

Se designó Diputado informante al honorable señor Bustos. — Fdos.) — **Fernando Varas.** — **Joaquín Rodríguez.** — **Juan B. Bustos.** — **J. Sotomayor.** — **R. Boizard.** — Acordado en Comisión — **G. Montt Pinto,** Secretario de la Comisión.

22) Informe de Comisión:

Honorable Cámara:

Vuestra Comisión de Educación Pública, había iniciado el estudio del proyecto de los señores Viena y Olavarría, en que se introducen diversas modificaciones a la organización universitaria, cuando el Ministro del ramo, por medio de un decreto, procedió, con fecha 16 del presente mes de agosto, a derogar el decreto con fuerza de ley número 384, de fecha 5 de agosto de 1932, que regía la organización de esos servicios y a restablecer la organización del decreto con fuerza de ley número 280, de 20 de mayo del año anterior.

El proyecto que se encontraba en estudio contenía, precisamente, en los artículos 1.º y 2.º, idénticas disposiciones a las adoptadas por el Gobierno, en virtud del decreto precitado.

En presencia de la situación producida, Vuestra Comisión de Educación, adoptó en la sesión que celebró el día 18 del presente el siguiente acuerdo:

“La Comisión de Educación, lamentando que por un decreto del Gobierno, se haya modificado la organización de la Universidad de Chile, regida hasta hoy por decre-

tos con fuerza de ley y decretos leyes, que el Gobierno no puede derogar por su sola voluntad, y para poner remedio a este mal, acuerda apresurar el estudio del proyecto en debate".

El anterior acuerdo, no implica un pronunciamiento acerca de la generación misma de los decretos con fuerza de ley y decretos leyes, sino que la opinión de Vuestra Comisión de que para resolver acerca de la validez de esa legislación, debe adoptarse un criterio general y uniforme, y proceder a su revisión o derogación por medio del acuerdo del Poder Legislativo, como se ha hecho hasta el presente, y no por medio de una simple resolución del Gobierno, como se ha hecho en el caso impugnado.

Además, hay que reconocer que toda la legislación emanada de disposiciones dictadas, ya sea en virtud de facultades extraordinarias, o por los Gobiernos de facto, se encuentra incorporada en nuestro sistema político, legal y administrativo, y que cualquiera modificación que en él se introduzca, debe ser sancionada por el Poder a quien la Constitución encomienda la tarea de legislar, o sea, al Congreso Nacional.

Sin embargo, Vuestra Comisión, en vista de la resolución del Gobierno, y en el deseo de producir una solución de armonía y para dar a la Honorable Cámara una base concreta, para que pueda discutir y dar sanción legal a las disposiciones del decreto del Gobierno, en cuanto derogan las de un decreto ley y restablecen las de otro con fuerza de ley, acordó desglosar y presentar a la Honorable Cámara como un proyecto de ley separado, los dos primeros artículos del proyecto de los señores Vicuña y Olavarría, que consultan, exactamente, esas dos ideas.

Quiere Vuestra Comisión, dejar expreso testimonio de que el acuerdo de desglosar esos artículos, no significa postergar el estudio de las demás disposiciones del proyecto de los señores Vicuña y Olavarría, que continuará discutiendo.

Igualmente, quiere dejar constancia de que el señor Ministro de Educación, manifestó que ese decreto sólo tendría un carácter transitorio, pues el Gobierno estudiaba y enviaría luego a la consideración legislativa un proyecto completo de Estatuto Universitario.

El proyecto que Vuestra Comisión somete a la deliberación de la Honorable Cámara, dice así:

PROYECTO DE LEY:

"Artículo 1.º Se deroga el decreto ley número 384, de 5 de agosto de 1932, que creó el Consejo Ejecutivo de la Universidad de Chile.

Art. 2.º Se declara en pleno vigor, como ley de la República, el Estatuto Orgánico de la Enseñanza Universitaria, cuyo texto definitivo fué fijado por el decreto con fuerza de ley número 280, de 20 de mayo de 1931.

Art. 3.º Esta ley empezará a regir desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

Sala de la Comisión, a 21 de agosto de 1933.

Se designó Diputado informante al honorable señor Cañas Flores.—Eduardo Moore.—Zenón Manzano.—Efraín Urrutia.—Joaquín Walker L.—Acordado en sesión de Comisión.—G. Montt Pinto, Secretario.

V.—TEXTO DEL DEBATE

1.— PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS Y REPRESION DEL DELITO DE ABANDONO DE FAMILIA.

El señor Rivera (Presidente).— En la presente sesión corresponde ocuparse del proyecto sobre responsabilidad paterna y pago de pensiones alimenticias.

El señor Prosecretario.— Es Diputado informante el honorable señor Gajardo.

El proyecto está impreso y repartido a los señores Diputados en el Boletín número 711.

El proyecto dice:

"Artículo 1.º Los juicios sobre alimentos se tramitarán con arreglo al procedimiento sumario señalado en el Título XII, del Libro III, del Código de Procedimiento Civil. En ningún caso podrá decretarse su continuación conforme a las reglas del juicio ordinario.

Exceptuándose los juicios sobre alimentos que se deban a menores de 18 años, de los cuales conocerán los Jueces especiales de

Menores y que se tramitarán con arreglo a lo dispuesto en los artículos 24 a 29, de la ley número 4,447, de 18 de octubre de 1928.

Los incidentes que se promuevan no entorpecerán la marcha del juicio y se fallarán en la sentencia definitiva.

En estos juicios se usará papel simple y las partes estarán exentas de hacer las consignaciones que, en ciertos casos, exigen las leyes.

Art. 2.º Toda resolución judicial que ordene el pago de una pensión alimenticia será notificada a la persona natural o jurídica que, por cuenta propia o ajena, o en el desempeño de un empleo o cargo, deba pagar al alimentante su sueldo, salario o cualquiera otra prestación en dinero, a fin de que entregue la suma o cuotas periódicas fijadas en ella, directamente al alimentario, a su representante legal o a la persona a cuyo cuidado esté, según lo determine el Juez.

Las cuotas no excederán del 50 por ciento del sueldo, del salario o de la prestación que reciba el alimentante.

Art. 3.º Si el notificado desobedeciere la orden a que se refiere el artículo anterior, incurrirá en una multa equivalente al doble de la cantidad mandada retener, lo que no opta para que se despache en contra del alimentante el mandamiento de ejecución que corresponda.

Art. 4.º La resolución judicial que fije una pensión alimenticia tendrá mérito ejecutivo tan pronto como se dictare, sin perjuicio de los recursos que procedan.

En el juicio ejecutivo, del cual conocerá el Tribunal que dictó la resolución, no será admisible otra excepción que la de pago.

El requerimiento de pago se entenderá efectuado para el cumplimiento total de la obligación alimenticia; pero el embargo por pensiones futuras no podrá extenderse a una suma superior al monto de las cuotas de 6 períodos.

Art. 5.º Será Juez competente para conocer de las demandas de alimentos deducidas por el cónyuge o los hijos menores de 18 años el de la residencia del alimentario; pero si éste la hubiere cambiado por abandono de hogar o rapto será competente el del domicilio del alimentante.

Art. 6.º De las acciones sobre alimentos intentadas en beneficio o por menores de

18 años conocerá el Juzgado Especial de Menores en los departamentos en que lo hubiere.

Art. 7.º El abandono de familia por más de 3 meses consecutivos será penado con reclusión menor en su grado mínimo.

Hay abandono de familia cuando el obligado no contribuye al sustento de su cónyuge, o al sustento y educación de sus hijos menores en proporción a sus facultades económicas.

Art. 8.º En la misma pena del artículo anterior incurrirá el que estando obligado por resolución judicial a prestar alimentos a su cónyuge, a sus padres e hijos legítimos o naturales, a su madre ilegítima o a los hijos ilegítimos indicados en el artículo 280 del Código Civil y teniendo los medios necesarios para hacerlo, dejare transcurrir el plazo señalado para el pago de una cuota de la obligación alimenticia, sin efectuarlo. Si dejare de pagar dos o más pensiones devengadas incurrirá en la pena de reclusión menor en su grado medio a máximo.

Art. 9.º La acción penal se sujetará a las disposiciones del Título I del Libro III del Código de Procedimiento Penal y sólo podrá ser ejercida por el respectivo alimentario, sus representantes legales, la Dirección General de Protección de Menores o las personas a cuyo cuidado esté.

Será Juez competente el que ejerza jurisdicción en lo criminal en el lugar de la residencia del alimentario, pero si éste la hubiere cambiado por abandono de hogar o rapto, será competente el del domicilio del alimentante.

Art. 10. En los procesos por los delitos de que trata esta ley se sobreseerá definitivamente siempre que mediare reconciliación entre los cónyuges o que el inculcado satisfaga su obligación alimenticia.

Las penas serán remitidas en cualquier momento en que el condenado u otra persona cumpliera la obligación, excepto en el caso de reincidencia.

Art. 11. La acción penal que establece esta ley prescribirá en un año.

Art. 12. Una vez ejecutoriadas las sentencias condenatorias que se dicten en conformidad a los artículos 7.º y 8.º de esta ley, producirán ipso-jure la pérdida de la patria potestad y la separación de bienes en su caso.

Art. 13. Las disposiciones de esta ley son aplicables a los alimentos provisorios y a las pensiones alimenticias decretadas en conformidad a la ley número 4,447, de 18 de octubre de 1928.

Art. 14. Introdúcense en el Código Civil las modificaciones que se indican a continuación:

a) Reemplázase el artículo 280, por el siguiente:

"Artículo 280. El hijo ilegítimo que no haya sido reconocido como natural podrá pedir alimentos del padre o madre o de ambos, según el caso:

1.º Si el padre o madre lo ha reconocido en instrumento auténtico como hijo simplemente ilegítimo o con el sólo objeto de darle alimentos;

2.º Si en la inscripción del nacimiento del hijo se hubiere dejado testimonio del nombre del padre o madre a petición de ellos o de mandatario constituido para este objeto por escritura pública;

3.º Si de documentos o de cualquier principio de prueba por escrito, emanados fehacientemente del supuesto padre resultare una confesión inequívoca de paternidad, o se probare la maternidad de la supuesta madre con testimonios fidedignos que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo;

4.º Si el presunto padre o madre ha proveído o contribuido al mantenimiento y educación del hijo, en calidad de tal, y de ello existiere un principio de prueba por escrito;

5.º Si el supuesto padre, citado a la presencia judicial, confesare bajo juramento que cree ser el padre, o si citado por dos veces, expresándose en la citación el objeto, se negare a comparecer, pudiendo;

6.º Si el período legal de la concepción del hijo correspondiere a la fecha del rapto o estupro de la madre.

El hecho de seducir a una menor haciéndola dejar la casa de la persona a cuyo cuidado está, es rapto, aunque no se emplee la fuerza".

b) Reemplázase el artículo 281, por el siguiente:

"Artículo 281. Si el hijo fuere incapaz de comparecer en juicio, la acción que se concede por el artículo anterior podrán deducirla sus representantes legales o las per-

sonas a quienes corresponda su cuidado".

c) Deróganse los artículos 282, 283, 284, 287 y 292.

d) Substitúyese el artículo 285, por el siguiente:

"Artículo 285. Los alimentos que se deben al hijo ilegítimo son los necesarios para su precisa subsistencia; pero en el caso del número 6 del artículo 280, el autor del rapto deberá suministrar, además, en cuanto fuere posible, los que competan al rango social de la madre".

e) Reemplázase el artículo 288, por el siguiente:

"Artículo 288. La acción que concede el artículo 280 no podrá intentarse contra ninguna mujer casada".

f) Substitúyese el artículo 289, por el siguiente:

"Artículo 289. La partida de nacimiento no servirá de prueba para establecer la paternidad o maternidad, salvo en el caso del número 2 del artículo 280".

Art. 15. Esta ley regirá desde la fecha de su publicación en el "Diario Oficial".

El señor **Gajardo**.— Señor Presidente, la depresión económica porque atraviesa el país, ha tenido en medio de su cortejo de miserias, la virtud de ciertos reactivos, y ha mostrado lacras sociales profundas que minaban las bases de la organización actual y que se desarrollaban ante la indiferencia de gobernantes y legisladores.

Es por eso que unos y otros debemos vivir con el oído y el pensamiento puestos en las necesidades que la vida va planteando en cada época.

Esos males que, como poderosas corrientes subterráneas, iban rectos a los firmes cimientos del Estado, han aparecido con toda fuerza al través de la crisis y han mostrado claramente su enorme trascendencia.

Es necesario, entonces, ponerles pronto remedio.

La Honorable Cámara va a pronunciarse frente al proyecto en estudio, sobre derechos y deberes familiares adscritos a la conciencia de todos los hombres y en todas las edades.

Los pueblos deben preocuparse preferentemente de sus reservas humanas y ellas residen en la familia, que es la piedra angular de la estructura del Estado.

Aristóteles, más de trescientos años antes

de Cristo, definía la familia, diciendo que era "la comunidad establecida naturalmente para la vida de todos los días".

Y De Play, en nuestra época, manifiesta que "la familia es la única institución cuyas características más esenciales no han sido negadas en nombre de la ciencia, de la justicia ni del derecho natural".

Y agrega, "la familia es el cuerpo intermedio entre el individuo y los distintos grupos colectivos o sociales, a tal punto que no puede concebirse el desenvolvimiento natural del individuo sin la vida de familia, ni la organización del Estado si no se funda sobre la familia como necesaria unidad social, orgánica y esencial de la vida colectiva". "Apenas el individualismo pretende deshacer la familia se desciende rápidamente hacia la barbarie".

El abandono de familia conspira contra la armonía social, conspira contra el porvenir de la raza, y engendra un aumento progresivo de la vagancia, mendicidad, raquitismo, criminalidad y mortalidad infantiles, que debería aterrar a los legisladores.

El niño abandonado recibe la más desastrosa lección moral, en los umbrales mismos de la vida; y necesariamente su espíritu se rebelará contra una sociedad que se mostró indiferente o impotente para garantizar sus derechos, e irá a engrosar las filas de la delincuencia o de la rebelión.

La amargura de los niños que se formaron en la deprimente escuela de la mendicidad y la vagancia, o la tristeza de los que vieron el sol por primera vez, desde el cielo limitado de una casa de huérfanos, ha de perseguirlos toda la vida: nunca tendrán el optimismo de los niños que crecieron en el ambiente tibio del hogar; y los pueblos necesitan del sano optimismo de la juventud para realizar su obra de bienestar y de progreso colectivos.

La legislación civil establece la obligación de los padres de alimentar y educar a sus hijos, y sanciona la contravención a esos deberes con el divorcio, separación de cuerpos, pensión alimenticia, suspensión de la patria potestad, etc., remedios que sirven sobre alimentos y por la falta de sanciones penales para los infractores.

El proyecto en estudio, que ha sido en absoluto ineficaz por la falta de procedimientos rápidos para ejercitar las acciones

dadosamente revisado por la Comisión de Legislación y Justicia, por distinguidos profesores, y experimentados magistrados y profesionales, rompe entre nosotros con rutinarias disposiciones de nuestra legislación positiva y procesal, pero sus ideas no son nuevas porque están incorporadas a las leyes de numerosas naciones.

Tres son las ideas fundamentales del proyecto: aplica sanciones penales para el delito de abandono de familia y para los que burlen el pago de pensiones alimenticias; amplía el derecho de los hijos ilegítimos para pedir alimentos; y establece procedimientos rápidos para ejercitar las acciones civiles y criminales en esta materia.

Voy a explicar brevemente a la Honorable Cámara los artículos más importantes del proyecto:

El artículo 1.º dispone que todos los juicios civiles sobre alimentos se tramitarán con arreglo al procedimiento sumario, a excepción de aquéllos sobre alimentos que se deban a menores de 18 años, que se someten a las disposiciones de la ley número 4,447, de 18 de octubre de 1928, de Tribunales de Menores.

Esta disposición se complementa con la del artículo 4.º que le da mérito ejecutivo a cualquiera resolución judicial que fije una pensión alimenticia tan pronto como se dictare, sin perjuicio de los recursos que procedan.

En los juicios sobre alimentos se usará papel simple y las partes no estarán obligadas a hacer las consignaciones de dinero que se exigen actualmente.

Las acciones sobre alimentos, por su naturaleza misma, deben estar sometidas a procedimientos fulminantes y libres de todo gasto, porque mal pueden soportar las encrucijadas dilatorias del procedimiento ordinario o apreciables gastos judiciales aquellos que están pidiendo precisamente su derecho a la vida.

Don Juan Esteban Montero interrogado, el año 1929, sobre este problema, afirmaba que las peticiones de alimentos no debían someterse a las dilaciones de un juicio, pues se refieren a personas que no están en condiciones de litigar; y agregaba: "El padre está obligado a mantener a sus hijos, la naturaleza y la ley le imponen ese deber; es misión del legislador y del juez velar porque ese deber se cumpla, consultando me-

dios expeditos para exigirlo e imponiendo la pena correspondiente al padre que se desentienda de él".

El artículo 2.º establece la obligación de entregar directamente al alimentario, su representante o a la persona a cuyo cuidado esté, la cuota alimenticia fijada, por quien deba pagar al obligado su sueldo, salario o cualquiera otra prestación en dinero; y en el artículo 3.º, se sanciona con multa del doble de la suma mandada retener al que desobedeciere aquella orden.

En atención a que este proyecto se refiere a obligaciones que se reclaman por personas abandonadas o que carecen de recursos, en los artículos 5.º y 9.º, se modifican las reglas de la competencia, en materia civil y criminal, y se establece que conocerá de las acciones a que se refiere el proyecto, el juez de la residencia del alimentario, a menos que éste lo hubiere cambiado por abandono de hogar o raptó, casos en los cuales es competente el juez del domicilio del alimentante.

El artículo 7.º sanciona con reclusión menor en su grado mínimo, o sea, de 61 a 540 días, el delito de abandono de familia, cuando el obligado no contribuya, por más de tres meses consecutivos, al sustento de su cónyuge, o al sustento y educación de sus hijos menores, en proporción a sus facultades económicas.

La debilidad de la mujer y de los hijos no pueden ser garantías de impunidad para el criminal egoísmo del padre que los abandona.

En realidad, si el problema del abandono de familia no ha adquirido, entre nosotros, caracteres todavía más sombríos, se debe a la abnegación de las madres chilenas que resisten el trabajo y el dolor, a fin de obtener abrigo y pan para salvar la vida de los hijos que los padres condenaron a su propia suerte.

Este es el aspecto fundamental que trata de remediar el proyecto, porque para alejar del ánimo de los más débiles la idea de su desamparo es necesario hacerles sentir los beneficios de leyes protectoras.

El artículo 8.º aplica la misma pena del artículo 7.º al que estando obligado, por resolución judicial, a prestar alimentos a su cónyuge, a sus padres e hijos legítimos o naturales, a su madre ilegítima, o a los hijos

ilegítimos, y teniendo los medios para hacerlo, dejare transcurrir el plazo señalado para el pago de una cuota de la obligación alimenticia, sin efectuarlo.

En vista de que este proyecto sólo trata de establecer una sanción penal para obligaciones civiles como un medio de que el temor a la pena produzca en la voluntad del obligado los efectos de una elocuente intimidación, el artículo 10 autoriza para sobreseer definitivamente siempre que mediare reconciliación, o que el inculcado satisfaga su obligación alimenticia, y para remitir la pena en cualquier momento en que el condenado u otra persona satisfaga su obligación alimenticia.

La tradicional benevolencia de nuestros jueces ha obligado a eliminar las penas de multas que, en los casos de los artículos 7.º y 8.º, contienen las legislaciones de otros países, donde acaso la severidad de los jueces permitió al legislador dar mayor amplitud a la pena.

Como una consecuencia natural de la infracción a los artículos recién citados, el artículo 12 dispone que ejecutoriadas las sentencias condenatorias producirán ipso-jure la pérdida de la patria potestad, y la separación de bienes, en su caso; ya que no es aceptable que quien no ha sabido cumplir con los más elementales deberes familiares siga disfrutando "del conjunto de derechos y facultades que la ley otorga a los padres sobre la persona y los bienes del hijo", o de la administración de los bienes de la sociedad conyugal, si los hubiere.

En este punto la legislación extranjera puede dividirse en dos grandes grupos: por una parte, aquella que sólo sanciona las infracciones atentatorias contra la vida o la salud de los hijos o parientes, como la de Portugal, Costa Rica, Paraguay, Perú, Nicaragua, etc., y por otra, aquella que aplica sanción penal a la omisión perjudicial de los deberes familiares, como la de Inglaterra, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Estados Unidos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, etc.

En el VI Congreso Panamericano del Niño, celebrado en Lima, del 4 al 11 de julio de 1930, se acordó recomendar a los Gobiernos americanos "hacer efectiva la responsabilidad de los padres o guardadores o de otras personas, cuya conducta o negligencia

"signifique un perjuicio de cualquier índole para los menores".

El artículo 14 contiene la reforma más importante al Código Civil, dado el enorme porcentaje de niños a quienes no iba a favorecer este proyecto debido a la mala organización de la familia; él importa la investigación de la paternidad ilegítima más allá de los límites contemplados en el Código Civil, que deja actualmente al ilegítimo entregado al capricho del padre que si citado a la presencia judicial manifiesta que no cree ser el padre de ese hijo, éste no tiene derecho alguno en su contra.

Según el artículo 14 el hijo ilegítimo, que no haya sido reconocido como natural, podrá pedir alimentos a su padre o madre, o a ambos, en los siguientes casos:

1.º Si el padre o madre lo ha reconocido en instrumento auténtico como hijo simplemente ilegítimo o con el sólo objeto de darle alimentos; esta disposición no hace otra cosa que darle fuerza de ley a una situación que invariablemente ha admitido la jurisprudencia de nuestros Tribunales;

2.º Si en la inscripción del nacimiento del hijo se hubiere dejado testimonio del nombre del padre o madre, a petición de ellos o de mandatario constituido para ese objeto por escritura pública; esta misma regla se contiene en el artículo 32 de la ley número 4.808, de 10 de febrero de 1930, sobre reforma a la Ley de Registro Civil;

3.º Si de documentos o de cualquier principio de prueba por escrito, emanados fehacientemente del supuesto padre resultare una confesión inequívoca de paternidad, o se probare la maternidad de la supuesta madre con testimonios fidedignos que establezcan el hecho del parto y la identidad del hijo; esta modificación está tomada del proyecto de don Andrés Bello, del año 1853, que era más humano que el actual, en este orden, y del artículo 340 del Código Francés, modificado por la ley de 16 de noviembre de 1912, y en lo que se refiere a la investigación de la maternidad del artículo 289 de nuestro Código Civil;

4.º Si el presunto padre o madre ha proveído o contribuido al mantenimiento y educación del hijo, en calidad de tal, y de ello existiere un principio de prueba por escrito;

5.º Si el supuesto padre, citado a la pre-

sencia judicial, confesare bajo juramento que cree ser el padre, o si citado por dos veces, expresándose en la citación el objeto, se negare a comparecer, pudiendo;

6.º Si el período legal de la concepción del hijo correspondiere a la fecha del rapto o estupro de la madre;

Los números 4.º y 6.º están tomados de la legislación francesa; y el 5.º contiene la reproducción de las disposiciones vigentes de nuestro Código Civil.

En esta parte he indicado las fuentes precisas de las disposiciones por el tradicional respeto que inspiran a los legisladores las doctrinas del Código Civil, cuya modificación generalmente se estrella con el temor de perturbar la armonía del mejor de nuestros Códigos, y que ha servido de base a la legislación civil de diversos países.

Los artículos finales del proyecto tienden a establecer la necesaria correlación entre las nuevas disposiciones aconsejadas por vuestra Comisión de Legislación y Justicia, y lo establecido en el Código Civil.

Por lo demás, muchas son las naciones que han legislado sobre la investigación de la paternidad; basta recordar que el Código Civil Alemán de 1900, establece el derecho del hijo para hacerse reconocer judicialmente por su padre, por cualesquiera de los medios legales de prueba; que la ley belga, de 8 de abril de 1928, también permite la investigación de la paternidad, reglamentándola cuidadosamente; y que el Código Civil brasilero, en su artículo 363, la consulta en casos más o menos semejantes a los de este proyecto.

Cabe repetir aquí la autorizada palabra del profesor, don Arturo Alessandri Rodríguez, que refiriéndose a esta moción, decía en la prensa de ayer:

"Esperamos que estas ligeras observaciones sirvan para demostrar la importancia del proyecto, y que está bien estudiado y concebido.

"La Honorable Cámara de Diputados haría una obra de verdadero interés público aprobándolo tal cual lo propone la Comisión de Legislación y Justicia. Cualquiera modificación o indicación, que no fuere debidamente meditada, podría destruir su plan general, y lo que es más grave aun, introducir en el Código Civil preceptos que no se armonicen con el resto de sus disposicio-

nes o que, en vez de resultar beneficiosos para el fin que se persigue, fueran perjudiciales o signifiquen un retroceso con respecto a la legislación vigente”.

Hasta aquí el breve análisis de las disposiciones más importantes del proyecto. La acogida que ha tenido en los más opuestos campos ideológicos está demostrando que responde a una necesidad social urgente.

El proyecto no es perfecto ni puede serlo ninguna ley positiva; pero sus beneficios alcanzarán a millares de hogares que sufren desamparo y miseria, por el abandono culpable de los padres; y los problemas urgentes no reclaman la más perfecta, sino la más rápida solución.

La relajación moral que se advierte en todos los órdenes de la vida política no es sino el reflejo de la crisis de autoridad, angustia económica, y falta de vida espiritual que socava la unidad familiar.

Pero este proyecto enfoca sólo un aspecto del problema: porque si queremos tocar con el dedo en la llaga viva del mal debemos reconocer que ni hoy ni mañana bastarán las leyes ni los hogares infantiles y asilos para dar techo a la infancia abandonada mientras la educación no se oriente en orden a formar ciudadanos morales, conscientes de sus deberes, y un poco menos preocupados de sus derechos.

Honorables Diputados, al pedirlos vuestro voto favorable para el informe de vuestra Comisión de Legislación y Justicia, lo hago, con las palabras de Carlos Roxlo, al votar en el Parlamento uruguayo, un proyecto sobre derechos familiares. “con el pensamiento fijo en los destinos de la patria, cuyo futuro deseo que sea una inmensa mañana de grandeza moral”.

Varios señores Diputados.— ¡Muy bien! ¡Muy bien!

—Aplausos en la Sala.

El señor Prosecretario. — El señor Merino formula en este proyecto las siguientes indicaciones:

Para intercalar en el artículo 2.º del proyecto la palabra “retenga” después de “... a fin”.

Para modificar el inciso 2.º del artículo 10 en la siguiente forma: “Las penas serán remitidas en cualquier momento en que el condenado u otra persona afiance suficientemente, a juicio del Tribunal, el cumpli-

miento de la obligación alimenticia por un lapso no menor de un año; excepto en el caso de reincidencia”.

Para agregar a continuación del artículo 10 la siguiente disposición: “La pena establecida en el artículo 8.º se aumentará en uno o dos grados, si se estableciere que el alimentante ha ocultado bienes con el objeto de eludir al cumplimiento de la obligación alimenticia”.

Para reemplazar en el artículo 14, número 3, la frase: “resultare una confesión inequívoca de paternidad”, por la siguiente: “resultare confesión de la paternidad, a juicio del Tribunal”.

Para suprimir del artículo 14, número 4, la frase: “y de ello existiere un principio de prueba por escrito”.

Para reemplazar en el artículo 14, número 6, letra b), la frase: “a quienes corresponda su cuidado” por “a cuyo cuidado se encontrare el hijo”.

Para reemplazar el artículo 14, número 6, letra d), en la parte que dice modificar el artículo 285 del Código Civil, por el siguiente: “Los alimentos que se deben al hijo ilegítimo son los necesarios para su subsistencia y comprenderán la obligación de proporcionar al alimentario, menor de edad, la enseñanza primaria y la de alguna profesión u oficio, en cuanto fuere posible según las facultades del alimentante”.

El señor Rivera (Presidente). — En discusión las indicaciones.

Ofrezco la palabra.

El señor Olavarría. — Como todos los proyectos o las ideas que tiendan directamente a beneficiar a las clases menesterosas de nuestro país, el proyecto en debate contará con la adhesión entusiasta y con el voto decidido de los Diputados social republicanos.

El honorable señor Gajardo, autor de este proyecto, lo ha explicado en forma brillante y elocuente, que me ahorra abundar en las mismas consideraciones para explicarlo; pero yo creo cumplir un deber al manifestar al honorable señor Gajardo, a nombre de mis colegas de representación, la expresión sincera de nuestras felicitaciones por su iniciación de bien público en esta materia.

Y quiero aprovechar la oportunidad que nos presenta esta iniciativa para hacer una

observación. El proyecto que discutimos ha sido elaborado por un honorable Diputado de los bancos de la derecha, por el honorable señor Gajardo, miembro del Partido Conservador.

Al hacer esta observación, no pretendo quemar incienso a los partidos de la derecha, a uno de los cuales pertenece el señor Gajardo; pero quiero que esta observación aparezca como un mentís contundente a los que creen que el pueblo sólo puede esperar de los partidos de ideas extremistas la solución de sus necesidades.

Creo que en materia de mejoramiento de nuestro pueblo, se puede y se debe esperar el auxilio sincero de los hombres que, sin distinción de colores de partidos políticos, tienen un corazón grande, una mentalidad amplia y un concepto claro y preciso del verdadero patriotismo. Por eso, al hacer esta observación, felicito al señor Gajardo, felicito al partido político a que pertenece, y espero que la acertada iniciativa de nuestro colega tendrá eco en todos los partidos, para que se siga haciendo y se haga, de una vez por todas, una obra fructífera, eficaz y positiva en beneficio de las clases menesterosas, que tanto sufren por causas ajenas a nuestra voluntad.

El señor **Rivera** (Presidente). — En discusión las indicaciones.

El señor **Del Canto**. — Después de la brillante exposición del Diputado informante respecto de la necesidad y conveniencia de interés público y nacional de aprobar este proyecto, no tengo nada que agregar; y espero que el proyecto sea aprobado por unanimidad. Deseo sólo expresar que, al aceptar nosotros estas ideas, nos colocamos dentro del diapason universal de todos los parlamentarios del mundo.

Revisando las resoluciones de la XXVII Conferencia Interparlamentaria de Bucarest, de octubre de 1931, he encontrado un voto, que dice así:

B

Situación y Protección en los diferentes países del niño ilegítimo y de la infancia abandonada.

I

“Considerando que para el desarrollo

normal y de la salud del niño, la obligación alimenticia constituye una condición indispensable:

Considerando que los niños que habitan un país diferente al de su padre o al de sus parientes sufren a menudo bajo la dificultad de no poder beneficiar de esta obligación alimenticia por el hecho de que el derecho internacional privado prescribe frecuentemente la aplicación de la ley extranjera;

La XXVII Conferencia Interparlamentaria expresa el voto de que: “Las sentencias judiciales concernientes a la obligación alimenticia” lleguen a ser ejecutorias en todos los países en una forma simplificada, conforme a las estipulaciones del acuerdo del 21 de junio de 1923 (B. G. Bl. 138, 1924), entre Alemania y Austria y a los acuerdos entre varios Cantones de la Confederación Helvética”.

De manera, señor Presidente, que junto con despachar este proyecto de ley y de colocarnos nosotros en igual diapasión que todos los países cultos, sería también de desear — por lo menos ésta es mi opinión — que en los próximos Tratados se busque la manera de dar cumplimiento a los acuerdos de la Conferencia Interparlamentaria de Bucarest, a fin de que las sentencias de los tribunales se cumplan tanto en el país como en el extranjero, y vice versa, las de los tribunales extranjeros en nuestro país, siempre que versen sobre esta materia.

El señor **Bustos**. — Pido la palabra.

El señor **Cabezón**. — Pido la palabra.

El señor **Merino**. — Pido la palabra.

El señor **Rivera** (Presidente). — Tiene la palabra el honorable señor Bustos.

El señor **Bustos**. — Señor Presidente, los que nos sentamos en estos bancos aceptamos, de donde vengan, las buenas ideas; y es por esto que nosotros votaremos con verdadero regocijo un proyecto tan trascendental como éste del señor Gajardo.

El señor **Cabezón**. — Los Diputados radicales votaremos con todo gusto este proyecto, porque viene a salvar una omisión de nuestras leyes sociales.

Este proyecto es de mucha importancia, señor Presidente, porque se refiere a la protección de la infancia desvalida, de aquellas personas que, teniendo padres en situación de alimentarlos y educarlos, los

abandonan y los dejan entregados a su suerte, sin mirar que estos niños serán los futuros dirigentes de la patria.

Es por esto que los Diputados radicales votarán con todo gusto este proyecto y hacen presente que contribuirán en todo sentido con sus votos a la aprobación de leyes como ésta.

El señor **Prosecretario**. — El señor Cabezón formula indicación para que se agregue un artículo transitorio que diga: "La presente ley no alterará la sustanciación de los actuales juicios sobre alimentos".

El señor **Rivera** (Presidente). — En discusión la indicación.

Tiene la palabra el honorable señor Merino.

El señor **Merino**. — Señor Presidente, por una ligera afección a la garganta, no me va a ser posible hacer algunas observaciones al proyecto presentado por el honorable señor Gajardo.

Las he formulado por escrito y hago indicación para que se inserten en el Boletín de Sesiones de la Cámara.

El señor **Rivera** (Presidente). — Si le parece a la Honorable Cámara, después de ser revisadas por la Mesa, se insertarán en el Boletín las observaciones del señor Diputado.

Acordado.

—Las observaciones a que se refiere el acuerdo anterior son las siguientes:

El Partido Socialista, por intermedio de su representación parlamentaria, y frente al proyecto en discusión sobre pensiones alimenticias y abandono de familias, quiere consignar su manera de pensar y sus aspiraciones, al margen de este proyecto.

Hasta ahora la institución de la familia se ha regido por las disposiciones vetustas del Código Civil, cuerpo de leyes que, si bien pudo satisfacer las necesidades sociales de la época en que fué dictado, es insuficiente para satisfacer las de nuestro tiempo. El Código Civil y la totalidad de sus disposiciones se encuentran informadas por principios, ideologías que no son, ni pueden ser los de la hora de ahora. En breves términos, puede afirmarse que son los principios románicos, propios del derecho romano, lo que determinan la finalidad de cada una de las instituciones que, en ese cuerpo de leyes, se legislan: la propiedad, la fa-

milia, los contratos, etc. Bastará recordar la patria potestad, definida en casi análogos términos que la patria potestad romana y en la que postula que, esta institución la constituyen los derechos de los padres sobre la persona y bienes del hijo. Los modernos principios jurídicos, que corresponden a las nuevas modalidades sociales, postulan que la patria potestad no es el conjunto de derechos de los padres, sino que por el contrario, es el conjunto de deberes de los progenitores y de los derechos de los hijos. Esta institución que nuestro viejo Código Civil ha instituido en beneficio de los padres, es y debe ser, en beneficio de los hijos. Los padres ya no tienen derechos, sino meramente deberes y obligaciones derivados del hecho físico de la paternidad. Respecto de los hijos hizo la más arbitraria y casi injuriosa clasificación. Allí están los hijos llamados "de dañado ayuntamiento", designación infamante, con la cual se pretende hacer recaer sobre los hijos, el pecado de ayuntamiento "dañado" de los padres: están los hijos adulterinos, los incestuosos, y los sacrílegos, cuando en realidad, los sacrílegos, los incestuosos y los adulterinos son los padres. Están los hijos legítimos e ilegítimos, como si la naturaleza hubiera hecho esa clasificación arbitraria y no fueran todos los hijos, habidos dentro o fuera del matrimonio, fisiológicamente iguales!

Los hijos, llamados "naturales", según nuestro viejo Código, no tienen derecho a cuota alguna en la herencia de sus padres, cuando hay legitimarios y, este hijo natural, queda excluido de la herencia, cuando es, precisamente, quien más la necesitaria... Al hijo ilegítimo, que el vulgo llama "hijo del amor", le niega hasta el derecho indiscutible de investigar quién es su padre, cerrándole todos los caminos de una reinvestigación moral y económica.

Nuestro Código Civil postula la impunidad del macho. El donjuanismo puede desarrollarse libremente, en la seguridad que el progenitor no tendrá responsabilidad alguna, por cuanto, negando la investigación de la paternidad a los hijos ilegítimos, libera al hombre de toda obligación, de toda responsabilidad. La institución de la familia, como la ha instituido nuestro Código Civil, es una institución que no puede ya

satisfacer las necesidades de la hora presente, y su continuación, no producirá otra consecuencia que aumentar los males que de ella se derivan. Estos males han repercutido especialmente en la clase trabajadora que, por lo general, han constituido el acervo sexual de las clases poseedoras. La mujer obrera, con su hijo a cuestas no encuentra trabajo en las fábricas; ni ocupación doméstica. No puede trabajar, cuando más necesita de su trabajo; lleva el baldón de la maternidad paseándola por calles y plazas, mientras el progenitor, el padre, resguardado por una legislación vetusta, anticuada e impropia, protegido por nuestro Código Civil, puede continuar en su función procreadora, libre de las cargas que el acto de la procreación debe engendrar.

La infancia, llamada "desvalida"; la criminalidad infantil, el raquitismo, la mortalidad de los niños; las desviaciones morales y físicas, tiene en esta paternidad irresponsable, su fuente más copiosa. Y si a ello se agrega el abandono por parte del Estado; la instrucción primaria insuficiente, la miseria consuetudinaria del hogar proletario, tendremos el cuadro, apenas esbozado, de lo que significa el mantenimiento del actual orden de cosas y, especialmente, de la legislación de la familia, conforme se contiene en el nuestro arcaico Código Civil.

El proyecto en discusión no satisface, por cierto, todas las necesidades que, en orden a la institución familiar, se hacen sentir entre nosotros. Es apenas un tímido ensayo; pero, a pesar de todo, significa el primer paso a una reforma integral de la legislación sobre la familia.

Nuestro partido pretende igualar los hijos legítimos e ilegítimos, dispensando una amplia protección a la maternidad. Considera que la naturaleza no ha establecido diferencias entre los hijos nacidos dentro o fuera del matrimonio. Levanta la función de la procreación a libérrima función humana y social. Estima que, en cuanto a la familia se refiere, el estado legislador debe dispensar de protección a los hijos. Postula una patria potestad, como conjunto de deberes de los padres para, con los hijos, repudiando la concepción romana de esta institución. Lucha por la reforma integral

de la institución familiar, para hacer de ella, no la cerrada institución que establece nuestro Código Civil, informada por principios teológicos y prejuicios sociales en contra de la maternidad, sino el organismo social, fundamentado en la naturaleza y en las necesidades sociales.

El proyecto en discusión habrá de ser completado e integrado con la ley de investigación de paternidad; con la ley que establezca el divorcio con disolución del vínculo matrimonial; con las que reforma las instituciones de la tutela y curatela, y, en general, la guarda de los menores, para hacer de la familia, del estado y de la sociedad en general, el ambiente propicio al desarrollo integral del niño.

Nuestro partido no acepta la afirmación de que la familia se encuentra en un proceso de desintegración por causas morales. La familia se encuentra en un proceso de transformación, como el Estado, la propiedad y demás instituciones del estado actual económico y capitalista, para dar paso a la nueva familia, al nuevo estado y a la nueva forma de propiedad, que imperarán en la futura sociedad socialista. Son causas económicas las que producen estos procesos, que muchos atribuyen a procesos morales. Y es tan urgente esta transformación; tan imperioso el llamado de la nueva sociedad, que nuevas disposiciones jurídicas, nuevos principios informantes van penetrando en la vieja estructura jurídica de nuestro Código.

El Partido Socialista ve con simpatía el proyecto en discusión, por estimar que él, si bien no satisface nuestros principios y aspiraciones, marca un paso, señala una orientación y un camino para una reforma y transformación más trascendente que, en un futuro no lejano, ha de realizarse".

Estas observaciones expresan la actitud que el Partido Socialista asume frente al proyecto, y, al mismo tiempo, expresan la simpatía que el Partido tiene hacia el proyecto en debate.

Quiero aprovechar esta oportunidad, ya que estoy con la palabra, para levantar un cargo, no precisamente directo, sino en forma de alusión táctica, que ha hecho el honorable señor Olavarría, a la representación que se sienta en estos bancos, cuando expresa que no ha presentado a la Cáma-

ra proyectos que tienda al bienestar de los menesterosos, y, en general, de los obreros...

El señor **Olavarría**.— No he dicho eso ni nada que se le parezca, honorable Diputado...

El señor **Merino**.— Debo expresar, señor Presidente, que esta representación parlamentaria del Partido Socialista se encuentra ante la situación de no presentar proyectos relativos a la familia, de acuerdo con sus postulados, porque está cierta de que no serían aprobados.

Por estas razones, nosotros nos hemos abstenido de desempeñar un papel activo en ese sentido y nos hemos limitado a apoyar todos los proyectos que, de cerca o de lejos, signifiquen una transformación más o menos lenta de nuestro ambiente social y familiar.

El señor **Olavarría**.— Pido la palabra, señor Presidente.

El señor **Murillo**.— Pido la palabra, señor Presidente.

El señor **Rivera** (Presidente).— Tiene la palabra el honorable señor Olavarría; a continuación, Su Señoría.

El señor **Olavarría**.— Quiero creer que el honorable señor Merino ha interpretado mal mis palabras.

Yo no he hecho un cargo a la representación socialista, en el sentido de que no haya presentado a la Honorable Cámara proyectos de la índole de éste al cual nos estamos refiriendo, y mal podría haberlo hecho, cuando me consta que uno de los Diputados socialistas, el honorable colega señor Casali, ha presentado varios proyectos que son de enorme interés para nuestras clases menesterosas.

Por lo demás, lo que yo he manifestado o querido decir, es que no es posible que se siga diciendo en el ambiente público que las ventajas que el pueblo espera de los legisladores y gobernantes sólo pueden provenir de los partidos de ideas extremistas. Lo que yo he manifestado es que esto es un error, y que debe haber confianza en el sentido de esperar toda labor en beneficio del pueblo de todos los bancos que tienen representación en esta Cámara, de dondequiera que haya hombres patriotas y que amen verdaderamente al pueblo.

Era esto lo que yo he querido decir, y

no lo que ha creído entender el honorable señor Merino.

El señor **Rivera** (Presidente).— Tiene la palabra el honorable señor Murillo.

El señor **Murillo**.— Debo empezar por donde han comenzado también mis honorables colegas, o sea, por dar un voto de aplauso a la iniciativa feliz que ha tenido nuestro honorable colega señor Gajardo al presentar este proyecto que viene a remediar los males sociales que perjudican considerablemente la situación de las familias que se forman a espaldas de la ley.

Y declaro también, señor Presidente, que entro a este debate con el temor natural que se desprende de mi incompetencia en materias de esta naturaleza, ya que se trata de un proyecto que está redactado por peritos abogados, y yo debo declarar que no tengo competencia profesional ninguna, puesto que no tengo la profesión de abogado. Sin embargo, señor Presidente, como las leyes son hijas del buen sentido y del raciocinio, y tomando como base, simplemente, el propósito de aclarar la materia, voy a hacer algunas observaciones para ver si este proyecto de ley contempla en todos sus aspectos la conveniencia de consultar todas las situaciones que pueden presentarse, y que hicieran a veces necesaria su aplicación.

Señor Presidente, yo no sé si lo que voy a decir corresponde a un vacío de esta ley o a mi propia ignorancia sobre esta cuestión. Comprendo que esta ley tiende principalmente a evitar que conquistadores afortunados, que el Don Juan, que recorre todos los barrios, pueda llegar donde la muchacha indefensa y confiada para hacerla a ella sola responsable de las consecuencias de una conquista, que cargue ella con las consecuencias.

Se comprenderá que, moralmente, no se puede tolerar que aquellos hombres desempeñen su función sexual como las bestias en los potreros y que no se preocupan de la suerte de la hembra, que dejan en cinta. El hombre tiene una obligación sagrada que cumplir y no puede renunciar, en absoluto, a las consecuencias de su intervención; pero entre tanto, señor Presidente, yo veo que pueden ocurrir casos como este: el abandono voluntario del hogar paterno de los hijos, especialmente de los hijos varones que,

llegados a cierta edad, suelen ser solicitados a dominados por recorrer vías extravagantes, por recorrer tierras y, entonces, se rebelan contra la patria potestad y se ponen en contacto directo con la vida y el mundo para correr su propia suerte. Ese no es el caso de la muchacha seducida.

Los padres, muchas veces, han tenido que lamentar esta situación odiosa que crea a sus hogares, esta especie de espíritu vagabundo que domina a los adolescentes y que es por desgracia, muy común y muy difundido durante aquella edad de la vida.

Hemos visto que muchos hogares lloran la ausencia de sus hijos; y por algo existe una tradición del "hijo pródigo".

Si los padres no logran que aquel hijo que abandona voluntariamente el hogar vuelva a reintegrarse a él, para recibir las directivas que le impone la vida moral en conjunto, y se lanza al azar de la suerte únicamente con el obeto de buscar sus propias satisfacciones en ella, es indudable, señor Presidente, que este hijo no tiene derecho a reclamar con la misma solicitud que el niño inexperto o que la madre abandonada, la protección paterna.

Vuelvo a repetir, señor Presidente, que puede ser que el espíritu de la ley sea bueno y que este vacío que yo he notado en ella, sea sólo un vacío de mi mente y fruto de la incompetencia que yo tengo sobre materias legales; pero, si no fuera así, yo creo que casos de esta clase, de hijos rebeldes, también debe ser considerado, después de haber sido requeridos y quedar a espaldas de la ley porque no cumplen con el deber primordial de ser solícitos con sus padres, porque han empezado en época temprana a rebelarse, contra la autoridad paterna. Y todavía lo que es más grave, dan mal ejemplo a sus hermanos menores.

El señor **Quintana**.—La ley de Protección de Menores consulta esos casos.

El señor **Murillo**.—Es posible; yo discurriré como un profano.

Por estas consideraciones, he querido agregar al proyecto un artículo que diría lo siguiente:

"Artículo... Esta ley no regirá para aquellos hijos que hubieren abandonado voluntariamente el hogar paterno, después de requeridos por sus progenitores o guardadores legales para volver a él.

Por requerimiento se entenderá la notificación judicial de rigor, pero si ella se hiciera impracticable, por ocultamiento del hijo remiso, la notificación podrá hacerse por otros medios, incluso el de un llamado por aviso por repetido en los principales diarios de la localidad".

Señor Presidente, demás está decir, dentro del concepto personal que me he formado de esta ley, que tengo que aplaudirla en todas las veras de mi alma. Pero si dentro de este proyecto no estuviera explícita y taxativamente consultada una disposición para los hijos remisos, es para ese caso sólo que he redactado el artículo a que acabo de referirme. De este modo el hijo vagabundo sabrá que la ley no protege su rebeldía y que reincorporado al hogar volverá a tener derecho al cariño y protección amplia de sus padres.

El señor **Rivera** (Presidente).—En discusión la indicación de Su Señoría,

El señor **Retamales**.—Pido la palabra.

El señor **Rivera** (Presidente).—Tiene la palabra Su Señoría.

El señor **Retamales**.—Yo también quiero felicitar al honorable colega que ha presentado este importante proyecto: pero a mi vez, quiero hacerle algunas reflexiones.

El objetivo fundamental del proyecto me parece que es el niño indigente, el que está abandonado de sus padres, para que llegue a obtener la alimentación y educación necesarias.

Pero es el caso que el proyecto obliga a esta protección a los padres que abandonan sus hijos y que tienen fortuna. Sin duda que la ley, en este caso, puede ser efectiva y llevarse a la práctica y dar sus buenos resultados. Pero, digo yo,—y este es un caso corriente—los palomillas que vagan en las calles de Santiago, en las estaciones de los Ferrocarriles, en las líneas de término de los tranvías, que es a quienes, precisamente, hay que defender. ¿en qué situación quedan?

Y se toma al azar uno de estos niños y se les pregunta: ¿dónde está su padre? El contesta: "Mi padre está sin trabajo". ¿Y qué haces aquí? "Estoy ganándome la vida de alguna manera para llevarle alimento a mis hermanitos". Esto es corriente.

El señor **Gajardo**.—Si me permite el honorable colega.

El señor **Retamales**.—Con mucho gusto.

El señor **Gajardo**.—En realidad, ese es otro problema, al que el Estado debe darle solución; pero la verdad es que generalmente el abandono es culpable. Basta recordar las cifras dadas por la Dirección de Cesantía.

Por ejemplo, en la ciudad de Temuco, de 578 racionados en las ollas para cesantes, 560 son mujeres y niños abandonados; en Curicó el 80% de los racionados son también mujeres y niños, y en La Serena, de 1.300 racionados, 900 son niños menores de 10 años.

Lo que está probando que los padres de esos niños tienen con qué alimentarse y no necesitan ir a las ollas de racionamiento de cesantes.

Y, como lo he manifestado en otra oportunidad, la Dirección de Cesantía ha registrado 70 mil casos de niños abandonados.

El señor **Retamales**.—Estoy conforme con las noticias que da el honorable colega. Pero el hecho que exista esta población flotante de niños abandonados en la forma en que hoy son atendidos por el Estado, ya que se trata de una situación transitoria, no es suficiente. Se trata simplemente de un servicio provisional, porque todas estas ollas y leyes de cesantía son servicios y leyes transitorias.

A mí me parece que no es ésta la educación o enseñanza que debemos dar a todos esos niños abandonados, o la protección que debemos prestarles.

Me parece que este sistema de las ollas, en donde se produce la promiscuidad y en que la moral escasea mucho, no es conveniente establecerlo en el carácter de permanente. Y es por eso que notaba un vacío en esta ley que faltaba contemplar el caso del niño que en la calle se busca la vida.

Esta ley debiera salvar esta dificultad, tomando en cuenta esta situación. Y ya que ha sido tan oportuno para presentar este proyecto de ley, creo que debe completarlo, no sólo para imponer el respeto en los casos en que haya hijos o padres malos que tienen dinero y no educan a sus hijos, sino que también hay que contemplar este otro caso: el del padre que no tiene trabajo ni con qué alimentar a sus hijos.

Porque la mayor parte de la gente indigente es la gente menesterosa. No creo que

haya tanta moral a la gran masa de nuestros conciudadanos ni creo que sean tampoco de mal corazón. Ni creo que se puede traer como ejemplo a este país lo que ocurre en otros países, sino que hay que ir a las realidades: aquí el niño abandonado es simplemente el indigente, aquel cuyo padre no tiene con qué hacer frente a sus gastos.

El señor **Cabezón**.—¿Me permite, Su Señoría una interrupción?

Si no me equivoco, el Gobierno designó una comisión especial para que se avocara al conocimiento del problema de la infancia desvalida, especialmente de la pre escolar y post escolar, y esta comisión anduvo gestionando en las diferentes reparticiones públicas y solicitando la ayuda para cumplir con su cometido.

Pues bien, leí hace algún tiempo en la prensa, que el trabajo de esta comisión fué inútil, porque nadie, ninguna repartición pública, ninguna oficina administrativa quiso contribuir a estudiar esta situación precaria de la infancia desvalida, especialmente pre escolar. En esta forma dió por terminada su misión esta comisión, sin haber llegado a ningún acuerdo, lo que se ha estimado como una falta de cooperación de las autoridades administrativas.

El señor **Retamales**.—Parece que estoy hablando con razón, señor Presidente, lo que está sosteniendo mi honorable colega, me está dando la razón de que en realidad existe la necesidad de legislar acerca de este problema desde el punto de vista que estoy considerando.

El señor **Gajardo**.—¿Me permite, Su Señoría? Lo que yo he manifestado es que se trata de dos problemas distintos y mis honorables colegas tienen el camino abierto para legislar acerca del otro problema a que se refiere Su Señoría; pero en ningún caso postergando la resolución del actual proyecto.

El señor **Retamales**.—Sin duda, honorable colega; pero Su Señoría que ha tenido tan buena voluntad y, por qué no decirlo también, tan buen corazón para venir a someternos este problema a la consideración de la Honorable Cámara, me parece que ha podido incluir en el proyecto a fin de hacer una obra completa, la idea de ir en protección del niño indigente y cuyo padre no tiene trabajo, no encuentra

trabajo en ninguna parte: esos son los verdaderos desgraciados y dignos de protección.

De manera que las observaciones que me he permitido formular y me ha escuchado la Honorable Cámara son a objeto de que se pueda ver modo de considerar la idea que dejo sustentada; en todo caso termino expresando que el proyecto de mi honorable colega, señor Gajardo, es una buena iniciativa y por lo tanto, le daré mi voto.

El señor **Prosecretario**. — Los señores Ferrada y Bustos formulan indicación para que se agregue el siguiente artículo:

"Artículo... Los hijos ilegítimos podrán demandar pensiones alimenticias a los herederos del padre o madre fallecidos, si concurrieren en su favor cualesquiera de los requisitos del artículo 280 del Código Civil".

El señor **Rivera** (Presidente). — En discusión la indicación.

El señor **Guzmán García**. — A fin de puntualizar un poco el debate y poder circunscribir todas las ideas que aquí se han emitido respecto de los menores, relacionados estos con sus padres o guardadores o dependientes de la autoridad paterna, es conveniente que la Honorable Cámara tenga presente que este proyecto no tiene por objeto abordar toda esta situación, todas estas dificultades, sino, como lo dice el honorable Diputado informante, y como lo dice también el encabezamiento del proyecto mismo él se refiere "a pensiones alimenticias" y "al abandono de familia".

Cuando este proyecto comenzó a discutirse en la Comisión de Legislación y Justicia, vino acompañado de un proyecto para modificar la actual legislación sobre menores, pensiones de los padres y derechos de éstos para corregir a sus hijos o recluirllos en establecimientos que tienen por objeto la reeducación, como son las casas de protección de menores, o para llevar a los menores a determinadas casas de familias, etc., etc. Todo esto corresponde a otro orden de ideas que la Honorable Cámara no debe contemplar en los momentos actuales en que discurrimos sobre este proyecto. Por lo tanto, aun cuando reconozco todo lo razonable y atendible que son las observaciones de mi honorable amigo señor Murillo, creo que ellas corresponden a otro orden de ideas que ya vienen en una ley que ha sido estu-

diada por la Comisión de Legislación y Justicia. Esta Comisión postergó la discusión sobre ese proyecto que modificaba la legislación de menores para dar más facilidad al despacho del proyecto actual, que es de urgencia.

Como digo, cada uno de los miembros de la Comisión ha estudiado ese proyecto, que vendrá en breve y en el cual se completa todo este orden de ideas en lo que se refiere a la protección de menores y al derecho de los padres para corregirlos y reeducarlos.

En consecuencia, de acuerdo con el profesor de Derecho Civil, don Arturo Alessandri R., quien ha publicado hace poco en "El Mercurio" y "El Diario Ilustrado" anteayer, un artículo sobre esta materia, rogaría a la Honorable Cámara prestase su aprobación a este proyecto tal como está, porque sus artículos tienen estrecha relación con ideas que no convendría alterar. Cualquiera modificación podría tener trascendencia en la legislación civil en que él se basa.

Rogaría a los honorables Diputados se sirvieran tener en cuenta: 1.º, que este proyecto no se refiere, tal como lo indica su encabezamiento y la exposición de motivos hecha por el honorable Diputado informante, a las pensiones alimenticias y al abandono de familia; y segundo, que con el fin de no complicarlo, no aborda ninguna de las ideas que aquí se han enumerado.

Respecto a las observaciones que ha formulado el honorable señor Retamales, siento estar en disconformidad con el honorable Diputado respecto del abandono de los hijos que hacen algunos padres, según dice Su Señoría, porque carecen de recursos.

Conozco este problema tanto por mi ejercicio profesional de abogado, como por haber sido consultor de compañías mineras en la parte sur del país. Sé que los padres que abandonan a sus hijos son generalmente los de familias pobres, de lo que vulgarmente se llama pobrario; y no es porque carezcan de recursos. Es por incomprensión, es por falta de ese sentimiento familiar que en unas clases populares es apenas incipiente.

Tal vez con una que otra excepción, nuestro pueblo no reconoce sus deberes familiares.

Ha sido abogado de empresas mineras y de empresas carboneras como la "Compañía Arauco Limitada" y puedo afirmar que en aquellos tiempos era un clamor constante el de las madres, de las mujeres, de las esposas legítimas, y para emplear la misma expresión que emplean ellos, pasadas por el Civil y por la Iglesia, que no recibían auxilio alguno de sus maridos. Ni siquiera tenían para los gastos indispensables de la quincena como el pan, la harina, la sal y la grasa, que son de absoluta necesidad para una familia. No es efectivo, como apuntaba el honorable señor Retamales, que el abandono de los hijos y el no reconocimiento de la obligación de alimentarlos se deba a la carencia de recursos.

Es probable que, dadas las circunstancias actuales de escasez y de miseria, puedan existir algunos casos; pero, en general, nuestro pueblo muy poco reconoce las obligaciones familiares. En nuestro país ese sentimiento hay que irlo formando, hay que irlo robusteciendo. Y ya que el honorable señor Retamales ha planteado este problema, me veo en la obligación de rectificarlo para que no discorra sobre una base errada.

No es efectivo que en nuestro pueblo exista el vínculo familiar sólido como existe en otros países. Es apenas incipiente, está apenas formándose.

Es posible que cuando tengamos una mayor cultura este sentimiento se robustecerá y tendremos el verdadero vínculo familiar, como existe en todos los pueblos cultos.

El señor **Rivera** (Presidente). — Tiene la palabra el honorable señor Ferrada.

El señor **Prosecretario**. — El señor Cansanova formula indicación para que se modifique el número 6: "Si el período legal de la concepción..." etc., por el siguiente: "Si el período legal de la concepción correspondiere a la fecha con que los padres — legítimos o ilegítimos — hayan tenido sus relaciones sexuales".

El señor **Ferrada**. — Este proyecto de ley, señor Presidente, es de amplia trascendencia social, pero es simple en su esencia, porque en la época actual, frente a una sociedad individualista, es bastante difícil abordar el problema en forma efectiva; a fin de lograr dar solución a este pavoroso

problema de miseria moral, que lanza al dolor y a la pobreza a gran número de niños.

Estoy de acuerdo con lo sostenido por mi honorable colega señor Retamales, y en desacuerdo con lo afirmado por el señor Guzmán García, en el sentido de creer que son los menesterosos, los que no tienen trabajo, los que están cogidos por la máquina ingrata de la sociedad moderna, los que abandonan a sus hijos.

Esta ley va a tener su aplicación en los casos en que los padres tengan medios de fortuna; pero, en la época de transición en que vive el país, en esta época de profunda crisis, tendrán que seguir esos pobrecitos niños desamparados alargando la mano temblorosa en demanda de caridad para comer, y van a ser muy pocos los niños desamparados sobre cuyas cabezas vaya a caer el rocío milagroso de esta ley, que es de amplia trascendencia social.

Pero, algo hay que hacer; es necesario colocar la primera piedra al edificio constructivo del mañana, y este proyecto, estudiado acuciosamente por nuestra Comisión de Legislación, es el punto inicial para dictar después una ley más amplia, que aborde los puntos indicados por nuestro honorable colega, señor Retamales.

En lo sucesivo tendremos que preocuparnos de que el Estado tienda a alimentar, a acoger bajo su amparo y a educar a estos pequeños desvalidos, que son los ciudadanos de mañana y que hoy sufren una amargura interminable.

He querido proponer una modificación, en la seguridad de que va a ser aceptada por la Cámara, porque abrirá una brecha para discutir en el porvenir el punto relativo a la formación de la familia con base más científica, con propósitos más humanos, a fin de dictar una ley de amplio y verdadero beneficio social.

He propuesto una indicación que tiende a salvaguardar un pequeño vacío, que posteriormente, en la discusión de este proyecto en Comisión he anotado.

Hay casos de padres que, por circunstancias de la vida, tienen hijos simplemente ilegítimos, a los cuales abandonan momentáneamente, pero que los reconocen después y hasta les suministran alimentos y les prodigan sus cuidados.

Estos padres, por ley biológica de la vida, pagan su tributo a la muerte, y dejan en el desamparo más absoluto a estos hijos que reconocieron y protegieron después de reconocer su error. Esos hijos ilegítimos quedan, en tal caso, en la más negra orfandad, porque suele la fortuna de sus padres, pasar a manos de terceros, que les llegan hasta a negar el derecho a la vida.

A remediar este inconveniente tiende mi indicación, es decir, a salvaguardar a los hijos ilegítimos, cuyos padres mueren intempestivamente, y que quedan sin una disposición legal que los ampare.

Mediante esta disposición, estos hijos pueden demandar la pensión que les corresponda, de los herederos de sus padres.

No dudo que el criterio amplio de la Honorable Cámara habrá de dar acogida a esta indicación que he formulado.

El señor **Bosch**.—Creo, señor Presidente, que la indicación que ha insinuado el honorable señor Murillo, en orden a que los hijos pródigos, aquellos niños aventureros, que aun a tierna edad, dejan el hogar paterno, sin preocuparse del dolor que con ello causan a sus padres, corren tras la aventura, no son dignos de ser favorecidos por esta ley y deben ser, por tanto, excluidos de los beneficios de la protección de sus disposiciones.

(Creo, señor Presidente, que ello no es razonable ni justo, porque todos sabemos, que la conducta, que es lenguaje total del individuo, se forma primero, por las fuerzas atávicas de la raza y de la herencia, robustecida por la segunda fuerza morigeradora de los actos humanos, que es la educación.

Si el niño, por falsa o inadecuada educación no pudo refrenar sus ímpetus raciales o atávicos, culpa es de sus padres que no lo formaron bien, y por ello son doblemente responsables, y, a mi juicio, estarían más obligados que nadie, a dispensar la ayuda y a enmendar los yerros que la desatención en la primera educación ha causado en la vida del hijo y ha sido, en gran parte, la causa determinante de esa conducta actual de sus hijos.

El señor **Murillo**.—¿Me permite una interrupción, honorable Diputado?

El señor **Bosch**.—Por eso creo, que esta

excepción, honorable colega, es francamente injusta e inconveniente.

Por otra parte, el Código Civil obliga a los padres no sólo a dar al hijo educación y alimentos, sino que lleva más allá su obligación legal: lo obliga también a velar por su colocación o establecimiento, entendiéndose por tal la obligación que un padre tiene de instalar y armar a sus hijos de todos aquellos elementos que le permita hacer frente ventajosamente a la vida, en la forma más adecuada a sus medios...

El señor **Murillo**.—¿Me permite una interrupción, honorable colega?

El señor **Bosch**.—Diga no más.

El señor **Murillo**.—Al formular la indicación que hice hace un momento, honorable colega, tuve como antecedente para ello el hecho de que, quedando estos niños, que ya son de cierta edad—son adolescentes—excluidos de los beneficios de la ley, deben considerar que es un deber, que es compulsivo para ellos, el tener que reintegrarse al hogar común.

De manera que yo, por un distinto camino que el de Su Señoría, persigo el mismo fin.

El niño que se sabe abandonado del padre por rebeldía de carácter o por instinto aventurero, reconocerá que volviendo al hogar paterno volverá a gozar, no sólo de las delicias del hogar, sino también de la protección de su padre.

Agregué, todavía, señor Presidente, que esta situación en que se coloca a los niños rebeldes, se produce después de su requerimiento judicial, con el objeto de dar al niño la ocasión de reintegrarse al hogar paterno.

Deseaba hacer esta salvedad, honorable Diputado.

El señor **Bosch**.—Continúo, señor Presidente. Como decía denantes, y respondiendo a las observaciones del honorable colega, digo que en la edad de la primera juventud, en la edad de todos los impulsos y de todas las ilusiones, no hay una manera adecuada para poder, en forma compulsiva, a obligar al hijo a tomar el buen camino; y por eso, sigo insistiendo en que sería profundamente inadecuada la excepción que quiera establecer Su Señoría en un proyecto de esta na-

turalaleza, y se opondría a principios científicos reconocidos, en orden a la influencia que tiene en la vida de los niños, como decía denantes, la situación especial de raza y las condiciones atávicas de todo orden, que necesitan del complemento de la educación, como el medio único que tiene la niñez para orientarse, en la primera edad, por el buen camino y para no salir de él, en razón de los impulsos dinámicos de las fuerzas naturales y raciales.

El señor **Valenzuela** (don Juan de Dios).—Señor Presidente, con infinito placer agregó una palabra en la discusión de este proyecto, porque él encierra un principio de humanidad y está fundado en la verdad y en la justicia.

El señor **Rivera** (Presidente).— Ofrezco la palabra.

El señor **Pérez Gacitúa** (don Lindor).—Ha sido una satisfacción para los Diputados conservadores, ver la iniciativa de nuestro honorable colega, don Oscar Gajardo, de haber presentado este proyecto, que aborda una materia tan importante como es aquella a que él se refiere, y a la felicitación que ha recibido de todos los sectores de la Honorable Cámara, unimos las nuestras, personales de sus colegas de bancos.

El señor Presidente y la Honorable Cámara se han dado cuenta, de cómo la opinión pública ha recibido con entusiasmo este proyecto, que, vendrá a resolver un grave problema social.

Pero, como decía muy bien un autorizado abogado que en la prensa sobre él se pronunciara, hay gran conveniencia en que sea despachado, más o menos, en los términos en que ha sido concebido, ya que él ha sido debidamente estudiado, no sólo por su autor, sino que también por los miembros de la Comisión de Legislación y Justicia de la Honorable Cámara.

Pero creo, que sin perjuicio de que sea bueno ese proyecto y aunque incurra en una aparente contradicción, conviene proponer dos ligeras modificaciones, que más bien son de redacción.

Dice el inciso segundo del artículo 1.º: "exceptuándose los juicios sobre alimentos", cuando ha querido decir, sin lugar a dudas, "exceptuánse etc.". Es una corrección de redacción.

Y la otra se refiere al mismo artículo 1.º inciso cuarto, cuando dice que "en estos juicios se usará papel simple", y yo pido que se diga: "en los juicios de alimentos", en razón a que en el primer inciso se habla sobre los juicios de alimentos y, en el segundo, de los que se exceptúan, referentes a los que trata el artículo 1.º, y, tal como está este cuarto inciso, parece referirse sólo al inciso segundo, cuando, en realidad, se refiere a los dos incisos. Esta modificación cuenta con la aquiescencia del autor del proyecto.

Voy a mandar mi indicación a la Mesa, y me permito consultarla acerca de la situación reglamentaria que se nos ha planteado: ha sido declarada de simple urgencia por la Honorable Cámara y el plazo de 15 días me parece que ya transcurrió, sin que la Honorable Cámara lo haya prorrogado, y, en estas condiciones, me parece, que si es aprobado hoy, debe serlo en general y en particular.

El señor **Prosecretario**.— La simple urgencia se declaró en julio 31.

El señor **Estévez**.— Podría prorrogarse el plazo.

El señor **Rivera** (Presidente).— Hay diversos proyectos con urgencia; pero, la urgencia comienza a contarse por orden de precedencia. En consecuencia, no habría necesidad de prórroga para este proyecto.

El señor **Prosecretario**.—El señor Barros Torres, apoyado por los señores Madrid don Enrique, Becerra y Valenzuela don Nestor, pide la clausura del debate.

El señor **Morales** (don Raúl).— Pido la palabra sobre la clausura.

El señor **Rivera** (Presidente).— Hay que votarla inmediatamente.

El señor **Morales** (don Raúl).— Yo quería hablar algo antes de la clausura, con el asentimiento de la Honorable Cámara.

El señor **Rivera** (Presidente).— Solicito el asentimiento de la Honorable Cámara para conceder la palabra al honorable señor Morales.

Acordado.

El señor **Olavarria**.— Siempre que sea corto.

El señor **Morales** (don Raúl).— En la creencia de que no se iba a pedir la clausura, yo había esperado que hablaran otros ho-

norables Diputados sobre este proyecto de pensiones alimenticias y abandono de familia.

Quería hacer algunas observaciones sobre la modificación del artículo 280 y siguientes de que habla este proyecto, y que se refiere a un punto que no creo que esté perfectamente claro.

Por eso desearía, que continuáramos la discusión de este proyecto en la sesión próxima, y que, con ese objeto, no clauráramos el debate ahora.

El señor **Gajardo**.— Yo le ruego al señor Presidente...

El señor **Rivera** (Presidente). — Con el acuerdo de la Honorable Cámara podría hablar Su Señoría; pero, le advierto a Su Señoría que ya va a dar la hora.

El señor **Gajardo**.— Yo le ruego a la Ho-

norable Cámara pronunciarse sobre este proyecto en la sesión de hoy, porque en la tabla figura en cuarto lugar. En consecuencia, va a quedar prorrogada su discusión por muchos días más, con grave perjuicio para aquellos que trata de favorecer.

El señor **Morales** (don Raúl).— Se pide una sesión especial.

El señor **Gajardo**.— Por lo demás, si el honorable señor Morales desea hacer algunas observaciones, puede concurrir a las sesiones de la Comisión de Legislación y Justicia.

El señor **Rivera** (Presidente).—Habiendo llegado la hora se levanta la sesión.

—Se levantó la sesión a las 16 horas.

A. Barraza Alvarez,
Jefe de la Redacción.
(Suplente)